



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA
POLÍTICA ESCUELA PROFESIONAL DE
DERECHO**

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SOBRE
ALIMENTOS, EXPEDIENTE N°0227-2014-0-184-JP-FC-
01; DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA - PERÚ. 2018**

**TRABAJO DE INVESTIGACION PARA OPTAR EL
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN DERECHO
Y CIENCIA POLITICA**

AUTOR

LECARNAQUE DELGADO, KELVIN NOLBERTO

ASESORA

CAMINO ABON, ROSA MERCEDES

LIMA – PERU

2018

JURADO EVALUADOR Y ASESOR DE TESIS

.....
Dr. DAVID SAUL PAULETT HAUYON
Presidente

.....
Mgtr. MARCIAL ASPAJO GUERRA
Miembro

.....
Mgtr. EDGAR PIMENTEL MORENO
Miembro

.....
Abg. ROSA MERCEDES CAMINO ABON
Asesora

AGRADECIMIENTO

Agradecer a Dios por la oportunidad de estudiar esta maravillosa carrera de Derecho y Ciencia Política, un cordial agradecimiento a nuestra docente por el apoyo incondicional hacia sus estudiantes, gracias por creer y confiar en nosotros.

Kelvin Nolberto Lecarnaque Delgado

DEDICATORIA

Dedico este proyecto de investigación a mi familia.

A mi Esposa, quien ha estado a mi lado todo este tiempo en que he trabajado este proyecto de investigación.

A mis amigos, quienes me han apoyado y a todos los que me prestaron ayuda.

Kelvin Nolberto Lecarnque Delgado

RESUMEN

La investigación tuvo como problema: ¿Cuáles son las características del proceso judicial sobre Alimentos, en el expediente N°0227-2014-0-184-JP-FC-01; primer juzgado de de paz letrado de San Miguel, perteneciente al Distrito Judicial de Lima, Perú 2018? el objetivo fue determinar las características del proceso en estudio. Es de tipo, cuantitativo, cualitativo, nivel exploratorio, descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis fue un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia; para recolectar los datos se utilizaron las técnicas de la observación y el análisis de contenido; y como instrumento una guía de observación. Los resultados revelaron que: los cumplimientos de los plazos fueron idóneos, la claridad de los medios probatorios en las resoluciones, la pertinencia de los medios probatorios de los hechos expuestos en el proceso y la calificación jurídica de los hechos que se demuestran en las sentencias.

Palabras claves: Características, Alimentos, asignación aticipada, proceso, sentencia.

ABSTRACT

The problem of the investigation was: What are the characteristics of the judicial process on Food, in file No. 0227-2014-0-184-JP-FC-01; first legal court of the peace of San Miguel, belonging to the Judicial District of Lima, Peru 2018? the objective was to determine the characteristics of the process under study. It is of type, quantitative, qualitative, exploratory, descriptive, and non-experimental, retrospective and cross-sectional design. The unit of analysis was a judicial file, selected through convenience sampling; Observation and content analysis techniques were used to collect the data; and as an instrument an observation guide. The results revealed that: compliance with the deadlines was adequate, the clarity of the evidence in the resolutions, the relevance of the evidence of the facts presented in the process and the legal classification of the facts that are demonstrated in the sentences.

Keywords: Characteristics, Food, early assignment, process, sentence.

INDICE

CARATULA.....	i
JURADO EVALUADOR Y ASESOR DE TESIS	ii
AGRADECIMIENTO	iii
DEDICATORIA	iv
RESUMEN	v
ABSTRACT	vi
INDICE	1
I. INTRODUCCION.....	6
1.1. Planteamiento del Problema:	6
1.2. Objetivos de la investigación	9
1.3. Justificación de la investigación	10
II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.....	12
2.1. Antecedentes	12
2.2. Bases Teóricas	14
2.2.1. Desarrollo de instituciones jurídicas procesales relacionadas con las sentencias en estudio	14
2.2.1.1. La acción.....	14
2.2.1.1.1 Concepto	14
2.2.1.1.2. Características del derecho de acción.....	15
2.2.1.1.3. Elementos del derecho de acción.....	16
2.2.1.2. La jurisdicción	16
2.2.1.2.1 Concepto	16
2.2.1.2.2. Principios aplicables en el ejercicio de la jurisdicción.....	17

2.2.1.2.3. Elementos de la jurisdicción	19
2.2.1.3. La competencia	20
2.2.1.3.1. Concepto	20
2.2.1.3.3. Criterios para determinar la competencia.....	20
2.2.1.3.3.1. La competencia por razón de territorio.	21
2.2.1.3.3.2. La competencia por razón de la cuantía.	21
2.2.1.3.3.3. La competencia por razón de materia civil.....	21
2.2.1.3.3.4. La competencia por razón de Grado.....	22
2.2.1.4. El proceso.....	23
2.2.1.4.1. Concepto	23
2.2.1.4.2. Funciones	24
2.2.1.4.3. Finalidad del proceso.....	25
2.2.1.4.4. El proceso como garantía constitucional.....	25
2.2.1.4.5. El debido proceso formal	27
2.2.1.4.5.1. Concepto	27
2.2.1.4.5.2. Elementos del debido proceso.....	28
2.2.1.6. El proceso civil.....	30
2.2.1.6.1. Fases o Etapas del Proceso Civil.....	31
2.2.1.7. El Proceso único	33
2.2.1.7.1. Pretensiones que se tramitan.....	34
2.2.1.7.2. Alimentos en el proceso unico	34
2.2.1.8. Los puntos controvertidos.....	35
2.2.1.8.1. Los puntos controvertidos actuados en el proceso judicial en estudios:	36
2.2.1.9. La prueba	36
2.2.1.9.1. En sentido común y jurídico	36
2.2.1.9.2. En sentido jurídico procesal.....	38

2.2.1.9.3. Diferencia entre prueba y medio probatorio	39
2.2.1.9.4. Concepto de prueba para el Juez	41
2.2.1.9.5. El objeto de la prueba	41
Cafferata. N, 1998 señala Objeto de prueba es aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba. Señala que la prueba puede recaer sobre hechos naturales (v.gr., la caída de un rayo) o humanos, físicos (v.gr., una lesión) o psíquicos (v.gr. intención homicida). También sobre la existencia y cualidades de personas (v.gr., nacimiento, edad, etc.), cosas y lugares.	41
2.2.1.9.6. La carga de la prueba.....	42
2.2.1.9.7. El principio de la carga de la prueba.....	43
2.2.1.9.8. Valoración y apreciación de la prueba.....	45
2.2.1.9.9. Sistemas de valoración de la prueba	46
2.2.1.9.9.1. El sistema de la tarifa legal	47
2.2.1.9.9.2. El sistema de valoración judicial.....	47
2.2.1.9.9.3. Sistema de la Sana Crítica	49
2.2.1.9.10. Operaciones mentales en la valoración de la prueba	49
2.2.1.9.11. Finalidad y fiabilidad de las pruebas.....	50
2.2.1.9.12. La valoración conjunta	51
2.2.1.9.13. El principio de adquisición	52
2.2.1.9.14. Las pruebas y la sentencia	52
2.2.1.9.15. Medios probatorios actuados en el proceso judicial en estudio.....	52
2.2.1.9.15.1. Documento	52
2.2.1.10. Las resoluciones judiciales	53
2.2.1.10.1. Concepto	53
2.2.1.10.2. Clases de resoluciones judiciales	56
2.2.1.11. Medios impugnatorios	56
2.2.1.11.1. Concepto	56

2.2.1.11.2. Fundamentos de los medios impugnatorios.....	57
2.2.1.11.3. Clases de medios impugnatorios	57
2.2.1.11.3. Medio Impugnatorio actuado en el proceso judicial en estudio:	58
2.2.1.12. La sentencia.....	58
2.2.1.12.1. Etimología	58
2.2.1.12.2. Concepto	58
2.2.1.12.3. Requisitos de la Sentencia.	59
2.2.1.12.4. Estructura de la sentencia	59
2.2.1.12.5. La motivación de la sentencia	60
2.2.2. Desarrollo de Instituciones Procesales Sustantiva del Expediente en estudio	60
2.2.2.1. Pretensión judicializada en el proceso en estudio.....	60
2.2.2.2. Alimentos.....	60
2.2.2.2.1. Concepto	60
2.2.2.2.2. Clasificación de alimentos	61
2.2.2.2.3. Obligación alimentaria.....	61
2.2.2.2.3.1. Condiciones para ejercer el derecho.....	61
2.2.2.2.3.2. Teoría sobre pensión de alimentos	62
2.3. Marco conceptual	62
IV. METODOLOGÍA	65
4.1. Tipo y nivel de la investigación.....	65
4.2. Diseño de la investigación.....	67
4.3. Unidad de análisis	68
4.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores.....	69
4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos.....	70
4.6. Procedimiento de recolección y, plan de análisis de datos	71

4.7. Matriz de consistencia lógica	72
4.8. Principios éticos	74
V. RESULTADOS.....	75
5.1. Resultados.....	75
5.2. Análisis de resultados.....	76
VI. CONCLUSIONES	78
Anexo 1: Evidencia para acreditar la Pre – existencia del objeto de estudio: proceso judicial.....	83
Anexo 2: Instrumento de recolección de datos:	95
Anexo 3: Declaración de compromiso ético	96

I. INTRODUCCION

La presente investigación estará referida a la caracterización del proceso sobre alimentos expediente N° 0227-2014-0-184-JP-FC-01; del distrito Judicial de Lima – Perú, 2018.

Uno de los principales problemas que puede aquejar a un país es la deficiente administración de justicia, el Perú no es ajeno a ese tipo de problemas, muy al contrario, en este país se concentra la mayor carga procesal. Si bien en las últimas décadas han surgido nuevas reformas procesales con el afán de complacer a los requerimientos de la población, lamentablemente la mala práctica y la falta de capacitación para una mejor implementación de estas reformas han ocasionado graves problemas al momento de su aplicación. Así mismo este problema se extiende no solo a nivel nacional, sino que también es parte de la realidad de otros países.

La ineficacia de la administración de justicia es un monstruoso prodigio porque está en aumento, hay incertidumbre en todos los países del mundo sobre la efectividad que los estados deben proporcionar y luego la seguridad jurídica, por eso es necesario analizarla a fondo para su comprensión y conocimiento.

1.1. Planteamiento del Problema:

La presente investigación se justifica, tomando en cuenta nuestra realidad en donde se evidencia que la sociedad reclama “justicia”, expresión que se puede interpretar en una solicitud de intervención inmediata de parte de las autoridades frente a hechos que diariamente trastocan el orden jurídico y social, lo cual genera desaliento no sólo en las víctimas de actos, sino también en la sociedad en su conjunto donde percibe al sistema de justicia como corrupto y cada vez desfavorable.

A nivel Internacional:

Rumany (2018) en Uruguay en su investigación La Justicia Civil de Uruguay es la mejor evaluada de la región En el caso de la Justicia Civil, Uruguay viene

mejorando en los últimos años y para la actual edición del índice superó a Canadá. Pero la gran revolución fue en 1989, dijo el profesor, cuando se pasó a la oralidad y que el juez tenga que estar en la audiencia. En términos generales, Uruguay es evaluado como el país de América Latina con más adhesión al Estado de derecho. Está ubicado en el lugar del mundo, dos puestos por debajo de su anterior posición, pero sigue estando por encima de la media. La ausencia de corrupción (al menos desde la percepción de los ciudadanos), el respeto a los derechos fundamentales y a las normas en general, son los aspectos más valorados del país. (p. 180)

En España, Paniagua (2015) menciona que la “Administración de Justicia, es necesariamente competencia del Gobierno ello de acuerdo a la normativa de su Constitución, donde se reglamenta ampliamente a través de parámetros de la designación del Poder Judicial, con ello se le increpa lentitud, ausencia de autonomía, ya que las resoluciones judiciales forman grados de inseguridad elevados, es por ello que no se consigue hablar de un Estado de Derecho”. (p. 50)

La Universidad Autónoma de Madrid (2014) realizó una investigación, en la cual determina que con relación a la administración de justicia en el país de España, se tiene una frase de uso común el que puede, puede, que tiene como significado, que cualquier persona que tenga poder económico o político puede lograr la decisión escrita con el resultado que desee, sin tener en cuenta la ley, ni el procedimiento, peor aún la moral de los operadores de la justicia, está muy deteriorada, como se evidencia en el desamparo de las personas que tienen poco dinero, por lo cual en la sociedad española la independencia del aparato judicial esta embargado a beneficio propio. (p. s/n.)

A nivel de Nacional:

Camacho (2015) en su libro la Justicia en el Perú: Cinco grandes Problemas pone en evidencia las dificultades que enfrenta nuestro sistema judicial. Al terminar el 2015, más de 2 millones de procesos quedarán sin resolverse; de otro lado, de cada 100 jueces que existe en el Perú, 42 se encuentran en situación de provisionalidad;

además, los procesos civiles demoran más de cuatro años de lo previsto por la ley; el Poder Judicial solo dispone del 3% de su presupuesto anual para inversiones; y, por último, en lo que va del año, más de 600 jueces fueron sancionados. (p. 54)

Herrera (2014) en su artículo define que el sistema de administración de justicia pasa por un momento crítico: la negativa percepción ciudadana sobre la transparencia de las principales entidades que lo conforman pone en entredicho la consecución de la seguridad jurídica y la justicia pronta que defiende. Dicho artículo aborda la propuesta de construcción de una estrategia de calidad para el sistema, sobre la base de los aspectos críticos identificados y como una forma de recobrar la confianza en dicho sistema. (p. 45)

A nivel de Nacional:

Camacho (2015) en su libro la Justicia en el Perú: Cinco grandes Problemas pone en evidencia las dificultades que enfrenta nuestro sistema judicial. Al terminar el 2015, más de 2 millones de procesos quedarán sin resolverse; de otro lado, de cada 100 jueces que existe en el Perú, 42 se encuentran en situación de provisionalidad; además, los procesos civiles demoran más de cuatro años de lo previsto por la ley; el Poder Judicial solo dispone del 3% de su presupuesto anual para inversiones; y, por último, en lo que va del año, más de 600 jueces fueron sancionados. (p. 54)

Herrera (2014) en su artículo define que el sistema de administración de justicia pasa por un momento crítico: la negativa percepción ciudadana sobre la transparencia de las principales entidades que lo conforman pone en entredicho la consecución de la seguridad jurídica y la justicia pronta que defiende. Dicho artículo aborda la propuesta de construcción de una estrategia de calidad para el sistema, sobre la base de los aspectos críticos identificados y como una forma de recobrar la confianza en dicho sistema. (p. 45)

A nivel Local:

En lo que comprende a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote las investigaciones individuales forman parte de una línea de investigación

titulada Analisis de Sentencias de procesos culminados en los distritos judiciales del Perú en función de la mejora continua de la calidad de las decisiones judiciales. En este sentido, éste proyecto se deriva de la línea antes citada y tiene como objeto de estudio un proceso judicial.

Con ésta finalidad el expediente seleccionado para elaborar el presente trabajo registra un proceso judicial de tipo civil, la pretensión judicializada es de alimentos, el número asignado es N° 0227-2014-0-184-JP-FC-0 corresponde al archivo del Primer Juzgado de Paz Letrado de la ciudad de Lima perteneciente al Distrito Judicial de Lima. Perú 2018.

1.1.1. Enunciado del problema

¿Cuáles son las características del proceso judicial sobre Alimentos en el expediente N° 0227-2014-0-184-JP-FC-01; del distrito judicial de Lima - Perú, 2018.

Para resolver el problema de investigación se trazaron los siguientes objetivos.

1.2. Objetivos de la investigación

1.1.1 Objetivo general

Determinar las características del proceso judicial sobre Alimentos en el expediente N° 0227-2014-0-184-JP-FC-01; del distrito judicial de Lima - Perú, 2018.

1.1.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general los objetivos específicos serán:

1.1.2.1. Identificar el cumplimiento de plazos, en el proceso judicial en estudio.

1.1.2.2. Identificar la claridad de las resoluciones, en el proceso judicial en estudio.

- 1.1.2.3. Identificar la congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes, en el proceso judicial en estudio.
- 1.1.2.4. Identificar las condiciones que garantizan el debido proceso, en el proceso judicial en estudio.
- 1.1.2.5. Identificar la congruencia de los medios probatorios admitidos con la pretensión planteadas y los puntos controvertidos establecidos, en el proceso judicial en estudio.
- 1.1.2.6. Identificar si los hechos expuestos para acreditar la pensión de alimentos en el proceso, es idónea para sustentar la pretensión invocada.

1.3. Justificación de la investigación

La presente investigación se enfocará en el estudio de este tema tan importante desde el punto de vista social, como es la Pensión de Alimentos.

Que el presente trabajo de investigación se justifica con el marco de investigación con una perspectiva orientada a determinar los criterios para fijar la Pensión de Alimentos, por lo que se debería determinar la calidad y motivación de las resoluciones judiciales tanto de Primera Instancias y Segunda Instancias. En este sentido los Procesos de Alimentos son los que más hay en el Poder Judicial, por lo que las partes no agotan la Vía por medio de una Conciliación Extrajudicial ya que es obligatoria la conciliación en el departamento de Tumbes, y los jueces no deberían admitir las demandas de alimentos sin previa agotamiento del acto conciliatorio, pero tratándose del Principio Superior del Niño no podría afectarse los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política del Perú.

También se justifica; porque es una actividad sistemática que coloca al investigador frente a frente con el fenómeno en estudio (el proceso judicial); por lo tanto, dicha experiencia facilitará la verificación del derecho, procesal y sustantivo, aplicado al proceso; también facilitará, constatar los actos procesales de los sujetos del proceso; los cuales contribuirán a que el investigador pueda identificar, recolectar los datos e interpretar los resultados; implicará, además, aplicar una revisión constante de la literatura general y especializada como recurso cognitivo necesario

para identificar las características del proceso judicial. Evidentemente tratándose del análisis de un solo proceso judicial, los resultados de éste contribuirán a facilitar la realización de trabajos consolidados, donde será posible constatar si existe homogenización de criterios para resolver controversias similares.

Evidentemente tratándose del análisis de un solo proceso judicial, los resultados de éste contribuirán a facilitar la realización de trabajos consolidados, donde será posible constatar si existe homogenización de criterios para resolver controversias similares.

En el estudiante, permitirá fortalecer su formación investigativa, mejorar su capacidad de lectura interpretativa, analítica y, la defensa de los hallazgos, facilitará observar su formación y nivel profesional.

Metodológicamente, es una propuesta respetuosa de la logicidad del método científico; puede ser adaptado para examinar perfiles de otros procesos y, contribuir en la construcción de instrumentos de investigación: lista de cotejo o guía de observación de procesos judiciales, por lo tanto, los destinatarios de los resultados son diversos: responsables de la política justicia, jueces, abogados, docentes, estudiantes, etc.

II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes

La presente investigación está aplicada en el Distrito Judicial de Lima

En el ámbito nacional.

Carhuapoma, K. (2015), en Perú, investigó: Las sentencias sobre pensión alimenticia transgreden el principio de igualdad de género de quien está obligado, lo que quiere decir que, su objetivo general fue el establecer cómo se relacionan las sentencias de alimentos y el principio de igualdad de género de quien está en la obligación en la jurisdicción distrital de Ascensión, 2013. Es un estudio cualitativo que recogió resultados por medio de métodos probabilísticos que consistieron en el análisis de cien expedientes cuyas sentencias fueron remitidas por el Juzgado de Paz Letrado de Ascensión en la Jurisdicción Judicial de Huancavelica. Con los resultados se puede colegir que se rechaza la hipótesis nula; es decir, se ha aceptado la hipótesis de trabajo, lo que indica que las sentencias sobre pensiones de alimentos tienen una relación significativa con el Principio de Igualdad de Género en el distrito de Ascensión- periodo 2013. Se pudo concluir que de hecho se tienen evidencias de que las sentencias sobre pensión de alimentos tienen una relación significativa con el principio de igualdad de género del obligado en el distrito político de Ascensión, en el 2013.

Por su parte, Delgado, S. (2017), en Perú, con su tesis Pensión de alimentos para el interés superior del niño, niña y adolescente, en el distrito jurisdiccional de San Juan de Lurigancho, 2016; desarrollada con el propósito de describir la manera en que se vienen dando las pensiones alimenticias con base en el interés superior de los niños y adolescentes en la jurisdicción del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2016. El estudio manejó una sola variable, es decir, la Pensión de alimentos para el interés superior del niño, la niña y adolescente por lo cual se puso énfasis a tres de los derechos que este grupo etario tiene, por su relevancia se optó por educación, bienestar en salud y alimentación. Para sustentar estas dimensiones se recurrió a

teóricos, tales como Peralta, Jarecca, Pankara y Morillo. El tipo de estudio de la presente investigación fue el descriptivo, con un nivel cuantitativo; el diseño de la muestra es no probabilístico; por este motivo, la muestra se conformó con cuarenta jueces que administran justicia en la jurisdicción de San Juan de Lurigancho. El instrumento que se elaboró fue el cuestionario, compuesto por 24 ítems. Los resultados fueron sistematizados en gráficos lo que permitió establecer que el 63% de los jueces indican que existe una deficiente; el 35% indica que es regular y el 3% considera que es bueno; por esta razón, al analizar y discutir los resultados se pudo concluir que la Pensión sobre alimentos necesita una administración consciente y responsable ya que persigue el fin de solventar el desarrollo del menor de edad y, de forma específica, satisfacer sus necesidades fundamentales.

Leyva (2014), Perú. En su tesis titulada “Las declaraciones juradas de los demandados con régimen independiente frente al interés superior del niño en los procesos de alimentos”. Tesis para optar el grado de Abogado de la UPAO (Universidad Antenos Orrego). Llegó a la conclusión de que la ley dio como fruto al derecho alimenticio puesto que tiene como punto de partida y de llegada al ciudadano.

En el anvito internacional

Según Punina (2015), Ecuador, en su tesis titulada “El pago de la pensión alimenticia y el interés superior del Alimentado”. Trabajo de investigación para obtener el título profesional de Abogado de la Universidad Técnica de Ambato; entre sus conclusiones indica que 90% de alimentantes se han mostrado demoras en el pago de las pensiones alimenticias con lo que se ha llevado a perjuicio a los niños; por esta razón las retenciones de las pensiones alimenticias debe de ser de forma oportuna y que se aplica en la actualidad.

Leyva (2014), Perú. En su tesis titulada “Las declaraciones juradas de los demandados con régimen independiente frente al interés superior del niño en los procesos de alimentos”. Tesis para optar el grado de Abogado de la UPAO

(Universidad Antenos Orrego). Llegó a la conclusión de que la ley dio como fruto al derecho alimenticio puesto que tiene como punto de partida y de llegada al ciudadano.

Sotomayor (2013), Ecuador, en su investigación titulada “Incorporación de la rendición de cuentas en materia de alimentos, en el código de la niñez y adolescencia ecuatoriano” presentó el estudio como requisito para titularse como abogada en la Universidad Nacional de Loja llegó a la conclusión que es de suma importancia garantizar que las pensiones no sean muy onerosas y más bien, sean eficaces, por medio de un sistema jurídico que exija el que se rindan los jóvenes ante la evidencia de cuentas de las pensiones sobre alimentos en la jurisdicción judicial del distrito ecuatoriano; esto, por tener muy en claro que estas pensiones no pueden ser malversadas y tienen como fin exclusivo el reducir las necesidades de los menores de edad.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Desarrollo de instituciones jurídicas procesales relacionadas con las sentencias en estudio

2.2.1.1. La acción.

2.2.1.1.1 Concepto

Según Illanes (2010) Es una actividad jurídica por naturaleza, puesto que origina relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, cargas y facultades.

Es un derecho subjetivo y no un simple poder o una facultad inherente al derecho de la libertad o la personalidad, que pertenece a todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que quieren recurrir al Estado para que les preste el servicio público de su jurisdicción, cualquiera que sea la razón o el derecho material que aleguen; esas cuestiones deben examinarse sólo para determinar si la sentencia debe ser de fondo o mérito y favorable o desfavorable al demandante, o excepciones

previas cuando la ley lo autorice; pero no pueden excluir la titularidad de la acción. Es un derecho autónomo, público, individual o abstracto, que pertenece al grupo de los derechos cívicos, cuya raíz se encuentra en las garantías constitucionales del particular frente al Estado y cuyo origen puede ser el común a todos los derechos de petición a la autoridad, pero que se diferencia fundamentalmente de éstos por su contenido, su objeto, sus fines, la calidad de los funcionarios ante quienes debe formularse, las relaciones jurídicas de que su ejercicio se deducen, la obligatoriedad y, por lo general, la inmutabilidad (cosa juzgada) de la decisión con que normalmente concluye un proceso.

Para Rioja (2014) La expresión acción proviene del latín *actio*, que significa ejercer, realizar, el efecto de hacer, posibilidad de ejecutar alguna cosa. En su acepción terminológica, la palabra acción proviene del latín *actio-oñis*. Ejercicio de la posibilidad de hacer. Resultado de hacer. En sentido procesal, derecho a acudir a un juez o tribunal recabando de él la tutela de un derecho o interés.

2.2.1.1.2. Características del derecho de acción.

De la misma forma el siguiendo a Rioja este señala que en la doctrina y la ciencia, se ha definido a la acción como el derecho público, autónomo, subjetivo y abstracto, mediante el cual todo sujeto puede acudir ante el órgano jurisdiccional en busca de tutela, el mismo que se materializa a través de una demanda.

Asimismo, indica que este derecho de acción es un derecho público, autónomo, abstracto o individual, perteneciente al grupo de derechos cívicos, y en cuya raíz se encuentra en las garantías constitucionales del particular frente al Estado y cuyo origen podría ser común a todos los derechos de petición a la autoridad. Las características del derecho de acción son los siguientes:

1). Señalado como derecho autónomo: dado que no es un simple poder o una facultad inherente al derecho de libertad o a la personalidad, que pertenece a todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que quieran recurrir al Estado para que les preste el servicio público de su jurisdicción.

2). Señalado como derecho público: por cuanto está dirigida contra el Estado el mismo que tiene el monopolio de la función jurisdiccional. Es un derecho público

en la medida que no se ejerce contra el demandado. Contra aquél se dirige la pretensión.

3). Señalado como derecho abstracto: dado que solo pone en funcionamiento el aparato jurisdiccional mediante el proceso. La acción como tal les pertenece a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlas, tengan o no razón, sin importar que obtengan o no una sentencia favorable. Es abstracto, también por cuanto no requiere de un derecho sustancial o material.

4). Señalado como derecho subjetivo: por cuanto se encuentra facultado para reclamarlo cualquier sujeto por la sola razón de tener esa condición (p. 88).

2.2.1.1.3. Elementos del derecho de acción.

Rioja sostiene que es conformado por elementos objetivos y subjetivos.

Señala a su vez que, los sujetos de la acción, y que se constituye por el actor (sujeto activo), el emplazado o demandado (sujeto pasivo), y el Estado a quien se dirige a través del Juez, que es el órgano mediante el cual se actúa (sujeto pasivo) (p. 88).

2.2.1.2. La jurisdicción

2.2.1.2.1 Concepto

En el tema civil este dominio jurisdiccional, la realiza el Poder Judicial con excepcionalidad, siendo indelegable abarcando todo el territorio de la República establecido por el artículo 1 del Código Procesal Civil.

Para el tribunal, la jurisdicción es la potestad y/o poder que otorga el Estado a determinadas instituciones para “decir”, resolver o aplicar el derecho que corresponde en un conflicto de intereses con en el carácter especial que sus decisiones son irrevisables; es decir, tienen la calidad de cosa juzgada. Aquellos órganos cuyas resoluciones son revisables no tienen jurisdicción sino competencia. El límite de la jurisdicción es la competencia por razón de grado, materia, turno, territorio, etc. STC Exp.N 0584-1998-HC/TC.

Al interior del contexto Constitucional (art. 139, inc.1) se consagra un principio conocido como el de unidad jurisdiccional. En virtud de este principio se entiende que la función jurisdiccional corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Sin embargo, el agotamiento y establecimiento de este principio no impide la existencia, dentro de la organización judicial, de tribunales con jurisdicción para conocer determinadas materias. (Tantalean. O, 2016).

Ledezma (2015) hace referencia a la función jurisdiccional en su eficacia es un medio de asegurar la necesaria continuidad del derecho. Y el derecho, a su vez, es un medio de acceso a los valores que merecen la tutela del Estado. A su vez señala que la jurisdicción es declarativa y constitutiva al mismo tiempo. Declara el derecho preexistente y crea nuevos estados jurídicos de certidumbre y de coerción inexistentes antes de la cosa juzgada.

Según Zavaleta (2007) la jurisdicción es la función pública, realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución

2.2.1.2.2. Principios aplicables en el ejercicio de la jurisdicción.

a. El principio de la cosa juzgada. Decir que una resolución ha adquirido la calidad de cosa juzgada equivale a que no puede ser modificada ni que el proceso sea reabierto. Una Resolución adquiere tal calidad cuando el justiciable ha hecho valer todos los recursos los recursos impugnativos que la ley le otorga en defensa de sus pretensiones, o pudiendo hacerlo ante una resolución emitida por una instancia intermedia deja transcurrir el tiempo y no acciona ejercitando un derecho fundamental que la propia Constitución establece: La pluralidad de instancia. En el primer supuesto, se dice que la resolución ha quedado ha quedado ejecutoriada; y en el segundo, que ha quedado consentida.

Es indudable la relación que existe entre la cosa juzgada y la seguridad jurídica; Por ello acertadamente Juan Monroy Gálvez 1996 sostiene: Para que los fines del proceso se concreten es indispensable que la decisión final que se obtenga en este sea de exigencia inexorable. Esta calidad de indiscutibilidad y de certeza en su contenido es una autoridad intrínseca que acompaña a las resoluciones judiciales y recibe el nombre de cosa juzgada.

b. El principio de la pluralidad de instancia. El principio de la “instancia plural”, o sea que un mismo proceso puede ser conocido por más de un juez (distinto al primero), es un tema que ha atormentado la humanidad desde hace más de dos mil años o sea que en los tiempos del principado los romanos establecieron la apelación. (ORESTANO).

Ciertamente, durante estos dos mil años las razones para no establecer procesos a instancia única han variado sustancialmente porque nuestra organización social (como es obvio ha cambiado).

Así, si la apelación como vehículo para promover una nueva instancia respondía, tanto en el tardo de Derecho Romano como en las monarquías absolutas europeos-continenciales (PADOA).

c. El principio del derecho de defensa. En este sentido tanto la constitución del 1979 y la del 1993 establecen las siguientes garantías del derecho de defensa aunque con un orden distinto: a) nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, b) toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención y c) toda persona tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

d. El principio de la motivación escrita de las resoluciones judiciales. Es frecuente encontrar, sentencias que no se entienden; en algunos casos; porque no evidencian una exposición clara de los hechos materia de juzgamiento, y en otros; porque no se evalúa su incidencia en el fallo final de los órganos jurisdiccionales.

Si las resoluciones judiciales registran características, como las que se han citado no pueden cumplir las diversas finalidades que tienen dentro del sistema jurídico. Si bien es cierto, que lo más importante es decidir sobre el interés de las partes sometidas a jurisdicción, suele suceder que las partes no reciben la debida información de los jueces sobre las razones que los condujo a tomar una decisión.

Los jueces están constitucionalmente obligados a fundamentar sus resoluciones y sentencias, basadas en los fundamentos de hecho y de derecho. Por ejemplo, en el supuesto de un mandato de detención, la resolución que lo ordena debe estar prolijamente sustentado, porque sus efectos privarán el derecho a la libertad, que es un derecho fundamental del ser humano.

2.2.1.2.3. Elementos de la jurisdicción

Para Martínez (2012) son aquellos atribuye poderes a los magistrados para el cumplimiento de sus funciones, y son:

La Notio: consiste en la potestad del juez de conocer la causa y juzgar conforme a ella, debe formar su convicción con el material de conocimiento que las partes la suministran.

La Vocatio: es el poder de convocar a las partes, de litigarlas al proceso, sometiéndolas jurídicamente a sus consecuencias

La Iudicium: es la aptitud de distar la sentencia definitiva que decide el conflicto, de emitir la decisión final hacia el cual se encaminó toda la actividad del proceso y que su decisión tenga autoridad de cosa juzgada.

La Executio o Imperium: consiste en el poder que tiene el juez para hacer que el mandato dado en la sentencia definitiva sea cumplido, pudiendo inclusive poner en actuación organismos de fuerza para afirmar el derecho.

Este es un corolario del derecho de defensa y de la instancia plural, ya que la negligencia del juzgador en motivar la resolución no permite que las partes conozcan los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda el

pronunciamiento, con la consecuente imposibilidad de un recurso efectivo ante el superior en grado. Esta disposición es obligatoria en todas las instancias judiciales, y están exceptuadas sólo los decretos (Chanamé, 2009).

2.2.1.3. La competencia

2.2.1.3.1. Concepto

La competencia es uno de los presupuestos procesales y se le entiende como una parte de la jurisdicción que corresponde en concreto a cada órgano jurisdiccional singular, según ciertos criterios, a través de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción entre los distintos órganos ordinarios de ella.

La competencia, como potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano (ROCCO 2005), puede ser absoluta o relativa. Será absoluta o improrrogable cuando su observancia se torna en irrestricta e ineludible, en cambio será relativa cuando su observancia no sea rígida pudiendo las partes prorrogarla. Con ello se suele determinar a la competencia por diversos rubros, los cuales refieren la materia, la cuantía, el territorio, la función, la conexión y el turno.

Rocco (como se citó en Sáez, 2015) define a la competencia como: “Es aquella parte de jurisdicción que comprende en concreto a cada órgano jurisdiccional singular, según ciertos criterios a través de las cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción entre los distintos órganos ordinario de ella” (p. 530).

2.2.1.3.3. Criterios para determinar la competencia.

Águila (2015) hace la siguiente precisión

La competencia se determina por la situación de hecho existente en el momento de la interposición de la demanda o solicitud y no podrá ser modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran posteriormente, salvo en los casos en que la Ley lo disponga expresamente, la competencia permite la

distribución de los asuntos justiciables entre los distintos jueces, la que se realiza con los siguientes criterios” (p. 42).

2.2.1.3.3.1. La competencia por razón de territorio.

El territorio, es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, este ámbito espacial también se le conoce como circuitos, partidos, distrito, etc.

Es preciso señalar que en el presente caso materia de análisis, cuando se incoa la demanda por alimentos el juez competente fue el Juez de Paz Letrado del Distrito Judicial de Tumbes, dado que en aquel entonces el menor que requería la pensión alimenticia residía en este distrito, esto está señalado el artículo 21° del Código Procesal Civil.

2.2.1.3.3.2. La competencia por razón de la cuantía.

La cuantía es uno de los elementos que puede determinar la competencia en un proceso, es el monto equivalente en dinero que importa lo reclamado en la demanda, su importancia radica para determinar la competencia del juez y del procedimiento a seguir.

En lo que respecta al proceso judicial materia de estudios, el legislador al momento de fijar la pensión alimenticia, no solo ha evaluado la capacidad económica de aquel que tiene el de demandado dentro del proceso judicial de alimentos, sino que, considerado las necesidades del menor petionario, así como también el principio del interés superior del niño y adolescente establecido en el artículo IX del título preliminar del código de los niños y adolescentes.

2.2.1.3.3.3. La competencia por razón de materia civil.

Según Bautista (2013), señala que este criterio se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el conflicto o litigio sometido al proceso, por razón de la materia por ejemplo, son competentes para conocer sobre las controversias sobre la comisión de delitos federales, los jueces de distrito [materia penal, materia

civil], de las controversias sobre delitos locales, conocen los jueces penales o los jueces de paz, según sea la pena aplicable, el criterio de la materia también nos permite ver cuando un litigio debe ser sometido a los tribunales del trabajo o a los tribunales administrativos.

Es así que, el tribunal competente en la presente investigación es el Juzgado de paz letrado del Distrito Judicial de Lima.

2.2.1.3.3.4. La competencia por razón de Grado.

El ejercicio de la función jurisdiccional no se agota con el conocimiento y decisión de litigio por arte de un solo juzgador, tomando que el o los titulares del órgano jurisdiccional son seres y por tanto seres susceptibles de equivocarse, “las leyes procesales establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio, sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no al derecho, a cada cognición de un litigio por cada juzgador se le denomina instancia. Se afirma que un proceso se encuentra en primera instancia, cuando es conocido por primera vez, la segunda instancia se inicia con arreglo por la parte afectada, contra la decisión de primera instancia, se interpone el recurso que procede contra dicha decisión, este recurso recibe el nombre de apelación. También cabe la posibilidad de las leyes procesales revean una tercera instancia, que se inicia con el recurso de casación o amparo”.

2.2.1.3.3.5 Determinación de la competencia en el proceso judicial en estudio

En el presente trabajo la pretensión en judicializada fue Alimentos. Por lo tanto el juez competente según el artículo 2 de la Ley 28439 del 28 de diciembre de 2004 se estableció que en todos los casos de alimentos eran competentes los jueces de Paz Letrados. Y pese a las constantes modificaciones posteriores, se mantuvo definitivamente que el tema de alimentos sea de exclusiva competencia de los Juzgados de Paz Letrados.

Así mismo el artículo 547 del Código Procesal Civil en el segundo párrafo nos señala que los jueces de paz letrados conocen los asuntos referidos en el inciso 1, del artículo 547 del Código Procesal Civil.

2.2.1.4. El proceso

2.2.1.4.1. Concepto

Es el conjunto de actos jurídicos procesales recíprocamente concatenados entre sí, de acuerdo con reglas preestablecidas por la ley, orientadas a la creación de una norma individual a través de la sentencia del juez, mediante la cual se resuelve conforme a derecho la cuestión judicial planteada por las partes (Bacre, 1986).

También se afirma, que el proceso judicial, es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión. La simple secuencia, no es proceso, sino procedimiento (Couture, 2002).

Escobar (2015), es el conjunto de actos o situaciones, enlazados y sucesivos, que se realizan en un órgano jurisdiccional a pedido de una de las partes o de oficio, con el fin de defender los derechos constitucionales que han sido violados.

Bautista (2014) lo define como el conjunto de actos mediante los cuales se constituyen, desarrolla y determina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas que en ella interviene, y que tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes; a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados y en el derecho aplicable. Por otro lado, Márquez (s.f.) sostiene: “El proceso sirve al derecho, en cuanto que es el método para la formación al desenvolvimiento de sus cualidades, y el motivo de su actuación está en la armonización de los conflictos de intereses surgidos entre los particulares” (párr. 6).

2.2.1.4.2. Funciones

Tomando en cuenta la opinión de Couture (2002), el proceso cumple las siguientes funciones:

A. Interés individual e interés social en el proceso. El proceso, es necesariamente teleológica, porque su existencia sólo se explica por su fin, que es dirimir el conflicto de intereses sometido a los órganos de la jurisdicción. Esto significa que el proceso por el proceso no existe.

Dicho fin es dual, privado y público, porque al mismo tiempo satisface el interés individual involucrado en el conflicto, y el interés social de asegurar la efectividad del derecho mediante el ejercicio incesante de la jurisdicción.

B. Función privada del proceso. Como quiera que esté proscrita la justicia por mano propia; el proceso representa el instrumento idóneo para alcanzar la satisfacción de un legítimo interés por acto de autoridad. En este sentido, el proceso, tiende a satisfacer las aspiraciones del individuo, que tiene la seguridad de que en el orden jurídico existe un medio eficaz para darle razón cuando la tiene y hacerle justicia cuando le falta, de no ser así; su fe en el derecho habría desaparecido. El proceso es una garantía individual (al margen de que la pretensión resulte ser de naturaleza penal o civil), porque, ampara al individuo, lo defiende del abuso de autoridad del juez; asimismo, de las extralimitaciones de su parte contraria y recíprocamente.

C. Función pública del proceso. En este sentido, el proceso es un medio idóneo para asegurar la realización del derecho y el afianzamiento de la paz jurídica. “El proceso sirve al derecho como un instrumento vivificante, como una constante renovación de soluciones históricas forjadas en el pasado. El derecho se realiza cada día en la jurisprudencia” (p. 120).

En la realidad, el proceso se observa como un conjunto de actos cuyos autores son las partes en conflicto y el Estado, representado por el Juez, quienes

aseguran su participación siguiendo el orden establecido en el sistema dentro de un escenario al que se denomina proceso, porque tiene un inicio y un fin, que se genera cuando en el mundo real se manifiesta un desorden con relevancia jurídica, entonces los ciudadanos acuden al Estado en busca de tutela jurídica que en ocasiones concluye con una sentencia.

El proceso para Aguila (2015, p. 12) cumple una doble función:

a. Privada: es el instrumento con el que cuenta toda persona natural o jurídica - gente o ente- para lograr una resolución del Estado. Es la alternativa final si es que ha logrado disolverlo mediante la autocomposición.

b. Pública: es la garantía que otorga el Estado a todos sus habitantes en contrapartida de la población impuesta respecto al uso de la fuerza privada.

2.2.1.4.3. Finalidad del proceso.

El proceso tiene como fin hacer efectivo los derechos de dicha naturaleza en caso de que sean violados o negados y prevenir futuras violaciones o negaciones de los mismos. Así mismo persigue principalmente el interés en la composición de la "Litis", el interés de la justicia cuya naturaleza es de carácter social.

Jaime (citado por Gaceta Jurídica, 2016) llama al proceso "Instrumento de satisfacción de pretensiones" como decisión del poder público sobre una queja, entendida en sentido jurídico, esto es, como dirigida por un miembro de una población frente a otro, ante un órgano patente específico. Frente a las citadas teorías debemos situar el fin del proceso, no exclusivamente en sus elementos jurídicos, ni en sus elementos sociológicos, si no en ambos (p. 13)

2.2.1.4.4. El proceso como garantía constitucional

Tomando en cuenta la exposición efectuada por Couture (2002): teóricamente, el proceso es, por sí mismo, un instrumento de tutela del derecho; aunque en la práctica, muchas veces el derecho sucumbe ante el proceso; esto suele ocurrir, cuando en la realidad las normas procesales son imperfectas en su creación, al extremo que se

desnaturalizan los principios, por lo tanto el proceso ya no cumple su función tutelar; por eso es importante considerar que existe una ley tutelar de las leyes de tutela, dicho de otro modo la Constitución, donde está previsto la existencia de un proceso como garantía de la persona humana.

Al respecto, el autor citado agrega: que, las constituciones del siglo XX consideran, con muy escasas excepciones, que es necesaria la inserción de una proclamación programática de principios de derecho procesal, en el conjunto de los derechos de la persona humana y de las garantías a ésta tendría.

Por su parte, en instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, formulada por la Asamblea de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948 se establece lo siguiente:

*“Art. 8º. Toda persona tiene derecho a un recurso ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley.
(...)”*

*Art. 10º. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal
(Naciones Unidas; 2015, p. 18 y 22)*

Esto significa que el Estado debe asegurar la existencia de un medio, un instrumento que garantice al ciudadano la defensa de sus derechos fundamentales, para que ante una eventual infracción de aquellos pueda usarlo para su protección, pero las reglas que regulen la conducción de éste medio, llamado proceso, deben ser realmente garantes y respetuosos de los principios constitucionales.

2.2.1.4.5. El debido proceso formal

2.1.1.4.5.1. Concepto

El debido proceso formal, proceso justo o simplemente debido proceso, es un derecho fundamental que tiene toda persona que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente. Es un derecho complejo de carácter procesal, porque está conformada por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho, inclusive el Estado, que pretenda hacer uso abusivo de éstos (Bustamante, 2001). El Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional, sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial (Ticona, 1994).

Bautista (2014) sostiene: “mediante el debido proceso, se garantiza que las reglas de organización judicial, competencia, tramite de los juicios y ejecución de las decisiones de la justicia, se llevan a cabo respetando las garantías constitucionales y legales vigentes” (p. 358).

Sanguino (como se citó en Cárdenas, 2013, 25 mayo) sostiene: “la garantía de un debido proceso constituye por ende una seguridad, una tutela, una protección para quien se vincula o tiene la posibilidad de vincularse a un proceso”.

Una de las principales garantías constitucionales es la del debido proceso, con sus alcances de la garantía de defensa, la garantía de petición, la de prueba y la de igualdad ante los actos procesales, formalmente regulados, porque mediante estos actos se hacen efectivas esas garantías (Couture, 2014).

2.2.1.4.5.2. Elementos del debido proceso

En esta línea de pensamiento se inscribe Aníbal Quiroga León, cuando afirma que Vemos pues que el proceso judicial, en tanto Debido Proceso, es el instrumento necesario para la obtención de la tutela judicial a partir del cumplimiento de sus principales finalidades: el acceso al ideal humano de justicia, el otorgamiento de la necesaria paz social para el gobierno de los hombres en un Estado Democrático de Derecho y la solución concreta de las controversias intersubjetivas de los particulares dándose a cada uno lo que en derecho le corresponde, y citando a Couture agrega Por ello, el debido proceso (que ha de garantizar la correcta aplicación y vigencia del proceso judicial), es a su vez garantía de una tutela judicial y ello, por su parte, elemento indispensable para la consecución de la finalidad del propio proceso judicial es en esa virtud, que refuerza el concepto sosteniendo que el Debido Proceso, o derecho de Audiencia en juicio según la tradición española, comprende:

a) El derecho de acceso al Tribunal: Por razones de economía, vamos a englobar aquí otros derechos que se relacionen con éste y que son elementos del principio; así, el derecho de acceso al tribunal o a un juicio implica que ese juez o tribunal sea independiente e imparcial, además, de ser el juez natural u ordinario; este derecho se aplica a todo tipo de proceso, dado que, por el principio de la igualdad de todos los individuos ante la ley el derecho se vulneraría si se priva o se limita el acceso de cualquier justiciable ante el juez, o se le obliga a comparecer ante un juez que no sea el juez natural u ordinario; y si el tribunal o juez no es independiente ni imparcial, se vulnera se desnaturaliza la justicia como supremo valor del sistema jurídico y del Estado de Derecho; por lo que debemos concluir que ese aspecto del Debido Proceso es válido y aplicable al proceso civil, penal, laboral, administrativo y aún disciplinario.

b) El derecho a la tutela efectiva de sus derechos: El acceso al tribunal debe orientarse a la protección efectiva de los derechos que implica y pone en juego el proceso con relación a los justiciables. Así, para que la decisión que resulte sea justa y razonable debe ser fundada y congruente, en este sentido, debe haber una relación concordante entre los argumentos de derecho o norma aplicable y los hechos

englobados en esa norma, los cuales ella se va a aplicar de modo que el fallo sobre la cuestión planteada, cuya solución es sometida al juez, sea lo suficientemente motivada como para que no implique ni injusticia, ni vulneración de derechos para cualquiera de las partes. Debe además existir el derecho de recurrir a las instancias superiores para ejercer los recursos que la ley pone en sus manos para enmendar la sentencia.

c) **El elemento de igualdad:** Considerado como consustancial al proceso y uno de los elementos dogmáticos del mismo, sin el cual no se aplica ni tiene sentido el derecho de defensa, el derecho a la igualdad constituye un principio o elemento del Debido Proceso puesto que implica la oportunidad de que todas las partes al concurrir al tribunal gocen de los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, que puedan defenderse en iguales condiciones e iguales oportunidades, con la posibilidad racional de hacer valer sus alegatos, medios y pruebas sin estar colocadas en situación de desventaja.

d) **El derecho de defensa:** De importancia capital dentro del contenido del debido proceso, el derecho de defensa consiste en la facultad de todo justiciable a disponer de todos los medios, garantías e instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa real y efectiva de sus derechos e intereses jurídicos, cuya privación o desconocimiento en su perjuicio conlleva lo que denominamos indefensión o violación del derecho de defensa. La violación del derecho de defensa no sólo se produce cuando se vulneran las reglas procesales, sino también cuando se atenta contra cualquier otro derecho envuelto en el proceso, ya sea por parte del órgano jurisdiccional, o por la de una de las partes, siempre que implique la privación o disminución de las posibilidades de defenderse.

e) **Derecho a conocer la acusación:** Es uno de los aspectos del proceso donde se manifiesta la noción restrictiva del debido proceso, algunos autores llegan a señalar que el mismo es específico del proceso penal´ pero, siendo un instrumento para la realización del derecho fundamental de la defensa, el mencionado derecho es inherente a toda clase o tipo de proceso, con las diferencias que le son consecuentes; así como al acusado en el proceso penal, ya sea por la autoridad que le persigue, ya sea en

la citación a comparecer al tribunal, se le debe informar el contenido, la indicación de la infracción o textos legales en virtud de los cuales se le requiere, en los asuntos civiles, comerciales, laborales, etc., la citación, el emplazamiento; en general, el acto introductorio de la demanda, debe indicar el objeto de la demanda y su causa, los motivos de hecho y de derecho. En definitiva, el demandado debe conocer la razón por la cual se le juzga, igual que el acusado de una infracción penal.

f) **Garantías fundamentales de orden procesal:** Se trata de una serie de derechos cuya finalidad es garantizar de modo real y efectivo el derecho de defensa y la objetividad e imparcialidad procesal, razones por las cuales tales garantías están presentes en todo proceso de orden penal, civil, laboral, comercial y contencioso administrativo.

2.2.1.6. El proceso civil

Para Rocco, en Alzamora (s.f) el proceso civil, “es el conjunto de las actividades del Estado y de los particulares con las que se realizan los derechos de éstos y de las entidades públicas, que han quedado insatisfechos por falta de actuación de la norma de que derivan” (p.14).

También, se dice que en el derecho procesal civil se dilucidan intereses de carácter privado, por su naturaleza es una institución de derecho público, dada la primacía del interés social en la conformación de la controversia, sobre los intereses en conflicto, y la importancia de los actos que ejerce el Estado como sucedáneo de la actividad que desplegaban las partes en el periodo de la autodefensa (Alzamora, s.f).

Para Juan Monroy Gálvez. El proceso civil existe sólo porque en la realidad se presentan conflictos de intereses o incertidumbres con relevancia jurídica que urge sean resueltas o despejadas para que haya paz social en justicia. El conflicto de intereses no es otra cosa que la confluencia de intereses contrapuestos sobre un mismo bien jurídico y el intento del titular de uno de los intereses de primar sobre el interés del otro que a su vez resiste el interés ajeno. La incertidumbre jurídica es la

falta de convicción o reconocimiento social en torno a la vigencia o eficacia de un derecho.

En otra revisión realizada por Ramos (2013)

“El proceso civil es el conjunto de actos procesales, preclusivos, que se suceden ordenadamente, realizados por los sujetos procesales, destinados a resolver un conflicto de intereses, intersubjetivos o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica y, cuya finalidad abstracta será lograr la pacífica convivencia social en el orden civil” (párr. 5)

Según Hugo Rocca, (citado por Bautista, 2014), define al proceso civil “como el conjunto de las actividades del estado y de las articulares con las que se realizan, los derechos de estos y de las entidades públicas, que han quedado insatisfecha por falta de actuaciones de la norma de que derivan”

2.2.1.6.1. Fases o Etapas del Proceso Civil.

“En términos generales los diversos ordenamientos procesales, contienen numerosas disposiciones, generales y especiales, sobre los principales actos a través de las cuales se desenvuelve cada proceso, por un lado, tales ordenamientos contienen disposiciones generales sobre, forma, plazo, jurisdicción y contenido de los actos procesales en general y por el otro esos mismos ordenamientos establecen algunas reglas sobre los requisitos particulares de determinados actos procesales; de ahí que el proceso civil al igual que el mercantil, laboral y otros; a diferencia del proceso penal, se desenvuelve a criterio de los doctrinarios a través de las siguientes etapas”:

De una de las muchas publicaciones hechas por la biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, sobre unos apuntes del maestro Ovalle Favela, con respecto a las etapas procesales y procedimiento; se puede notar que dicho jurista considera además de las etapas debidamente establecidas una “etapa preliminar o previa” al proceso propiamente dicho. Acota el citado jurista que durante esta etapa se pueden llevar a cabo alguno de los medios preparatorios o de las providencias precautorias (conciliaciones) y otros, precisa que esta es una etapa

contingente o eventual (José Ovalle Favela, Etapas Procesales o de Procedimiento- Publicado por la UNAM: 60).

Hinostroza Minguez (2012), en su libro Derecho Procesal Civil, al realizar el estudio de las etapas o fases del Proceso Civil, cita entre otros al maestro José Ovalle Favela, de cuyos apuntes se consideran seis etapas en el proceso civil, siendo estas lo siguiente:

- La etapa postulatoria, expositiva, polémica o introductoria.
- La etapa probatoria o demostrativa.
- La etapa de las conclusiones o alegatos.
- La etapa resolutive.
- La etapa de las Impugnaciones.
- La etapa de Ejecución.

a). La primera Etapa del Proceso, según el maestro Ovalle Favela es la Postulatoria, Expositiva, Polémica o Introductoria, en esta primera etapa tiene por objeto que las partes expongan sus pretensiones ante el Juez, así como los hechos y las normas jurídicos en que se basan o sustentan. Esta etapa se concreta con la Demanda del actor y la contestación de la demanda por parte del demandado, en esta etapa el juzgador debe resolver sobre la admisibilidad, inadmisibilidad, improcedencia, de ser declarado admisible, ordena el emplazamiento de la parte del demandado, se da oportunidad al demandado para su contestación.

b). La Segunda Etapa del Proceso, es la etapa Probatoria o Demostrativa, la cual tiene por finalidad que las partes suministren los medios de prueba necesarios con el objeto de verificar los hechos afirmados en la etapa expositiva (a criterio del juzgador), la etapa de prueba se desarrolla fundamentalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba.

c). La tercera Etapa del Proceso, es la etapa conocido como la de Conclusiones o Alegatos, el que tiene por objeto que en esta etapa las partes formule sus conclusiones o alegatos, precisando y reafirmando sus pretensiones, con

base a los resultados de la actividad probatoria; esta etapa para algunos juristas, es conclusiva en doble sentido. En ella las partes formulan sus conclusiones y alegatos, en ella también concluye y termina la actividad de las partes en el proceso.

d). La cuarta Etapa del Proceso, etapa considerado como la Resolutiva, en esta etapa el juzgador, tomado como base las pretensiones y afirmaciones de las partes y valorando los medios de prueba practicados con anterioridad, emite la sentencia definitiva, en virtud de lo cual decide sobre el litigio sometido al proceso.

e). La etapa Impugnativa, es la etapa posterior a la etapa Resolutiva, cuando las partes (una o ambas), consideren necesario impugnar la sentencia; esta etapa da inicio a una segunda instancia o segundo grado de conocimiento, que tiene por objeto la revisión de la legalidad del procedimiento de primera instancia, o de la sentencia definitiva dictada en ella.

f). La etapa de Ejecución, es otra de las etapas de carácter eventual, la cual se presenta cuando parte que obtuvo sentencia de condena acorde a sus pretensiones, solicita al juez tome las medidas necesarias para que esta sea realizada coactivamente; en razón que la parte vencida no ha cumplido voluntariamente con lo ordenado en la sentencia.

Lo expuesto anteriormente está establecido en el ordenamiento jurídico (Código Procesal Civil) en la Sección Cuarta – Postulación del Proceso Art. 424 – 474.

2.2.1.7. El Proceso único

Conforme a lo dicho, para nuestro caso, la vía procedimental fue un proceso Único, acorde al avance de la disciplina procesal, debe contar con los espacios mínimos para el ejercicio correcto de un debido proceso. En efecto, un proceso bien llevado cuenta cuando menos, con un espacio para demandar, un espacio para contradecir, una audiencia de discusión y evaluación y la sentencia del caso. Como se puede apreciar, el proceso único justamente cuenta con estas etapas: demanda, contestación, audiencia única y sentencia.

Estos procesos de cognición se caracterizan por tener fases mínimas encaminadas a un mismo fin, las cuales según CARNELUTTI 1959 son: la introducción, la instrucción y el pronunciamiento. En la introducción se tiende a poner a los sujetos procesales en la situación recíproca necesaria para el cumplimiento del proceso, en la instrucción se busca suministrar al Juez los elementos necesarios para la decisión, y en el pronunciamiento se tiende a formar y a dar a conocer la decisión final del caso; haciendo hincapié en que la distinción lógica entre tales fases no siempre se corresponderá exactamente con la sucesión cronológica.

2.2.1.7.1. Pretensiones que se tramitan

De acuerdo al Código del niño y adolescente, en su capítulo II se sujetan al Proceso único las pretensiones de los niños y adolescentes en la pretensión de alimentos

2.2.1.7.2. Alimentos en el proceso unico

En este supuesto se conjugan tanto la urgencia de lo pedido como la simplicidad en la tramitación. Desde luego, los alimentos refieren lo necesario para que un sujeto pueda desenvolverse en su vida cotidiana. Por ello abarca propiamente la alimentación o sustento, pero también el vestido, habitación, la educación, la salud y asistencia médica, la educación e instrucción, la capacitación para el trabajo y hasta la recreación (Placido, 2001).

A decir Cornejo (1998).

Dicho de otro modo, tres son los presupuestos que permiten ejercer el derecho de pedir alimentos: un estado de necesidad de quien lo pide, la posibilidad económica de quien debe prestarlos, y una norma legal que establezca la obligación ya que se trata de una obligación civil y no de una simple obligación natural.

En fin por extensión se tramitaran en este carril todos los demás procesos conectados con el establecimiento o fijación de una pensión alimentaria, como son su reducción, aumento, prorrateo y extinción.

2.2.1.8. Los puntos controvertidos

En opinión de Hinostroza (2012)

“Son cuestiones relevantes para la solución de la causa, afirmadas por los sujetos procesales, emergen de la confrontación de los hechos expuestos en la demanda y la absolución de aquella. La determinación de los puntos controvertidos influye en la admisibilidad de los medios probatorios; porque, aquellos deberán servir para dilucidar los puntos en conflicto y la controversia planteada en el proceso”.

“Una vez postulada la fijación de la controversia, el juez definirá cuáles serán los lineamientos sobre los cuales dirigirá el proceso y las pruebas que correspondan, lo cual será de suma importancia para establecer las premisas de razonamiento de la sentencia”. (Salas, 2013).

Santos (2014) han abordado el tema de los Puntos Controvertidos en diferentes artículos, pero de manera no siempre uniforme y ha dejado a la jurisprudencia su determinación práctica en el proceso. Así el art. 188 del C.P.C. estipula que “los medios probatorios tiene por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertido”; con lo que el código diferencia claramente entre los hechos expuestos por las partes y los puntos controvertidos que refuerzan sobre los que versa el proceso. Las referencias a los Puntos Controvertidos también aparecen de los artículos 471 y 122 inc. 1, que efectivamente exigen “en la audiencia sin conciliación la fijación de Puntos Controvertidos y de manera muy especial, aquellos Puntos Controvertidos que van a ser materia de prueba”. En esta última parte lo que llama profundamente la atención es la disquisición de un lado de los "puntos controvertidos a secas" y por otro lado "los puntos controvertidos materia de prueba", esto significa acaso que existen puntos controvertidos que no son materia de prueba. Una posible explicación del art. 471 implicaría asumir la existencia de hechos discutidos pero cuya probanza es innecesaria, o la presencia de hechos accesorios discutidos en los que no interesa determinar su verosimilitud (p.12).

2.2.1.8.1. Los puntos controvertidos actuados en el proceso judicial en estudios:

Los puntos controvertidos determinados en el proceso en estudio fueron:

- 1.- determinar las necesidades de los menores alimentistas.
- 2.- determinar las posibilidades del que debe prestar los alimentos.
- 3.- determinar eventualmente el monto de pensión a asignar.

2.2.1.9. La prueba

COUTURE señala que los problemas de la prueba consisten en saber qué es la prueba; qué se prueba; quién prueba; cómo se prueba; qué valor tiene la prueba producida.

En otros términos: el primero de esos temas plantea el problema del concepto de la prueba; el segundo, el objeto de la prueba; el tercero, la carga de la prueba; el cuarto, el procedimiento probatorio; el último, la valoración de la prueba. Hernando Devis Echandía, procesalista colombiano, dice: Suele hablarse con mayor frecuencia, de que es prueba judicial todo medio que sirve para conocer cualquier cosa o hecho.

De Santo (s/f) (citado en Gonzales 2014), la prueba es: “al conjunto de modos u operaciones (medios de prueba) del que se extraen, a raíz de las “fuente que proporcionan el motivo o motivos generadores de la convicción judicial” (p. 718).

2.2.1.9.1. En sentido común y jurídico

En sentido semántico, prueba significa, acción y efecto de probar. Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo (Real Academia Española, s.f).

Tribunal Constitucional ha señalado Derecho Fundamental a la Prueba

Que, el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del

derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos.

No obstante, es menester considerar también que el derecho a la prueba lleva aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un derecho fundamental de los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.

Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en general y del derecho a la prueba en particular, éste, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia. Esto es así por cuanto el proceso penal no sólo constituye un instrumento que debe garantizar los derechos fundamentales de los procesados, sino también debe hacer efectiva la responsabilidad jurídico-penal de las personas que sean halladas culpables dentro de un proceso penal.

Como puede verse, uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De

lo cual se deriva una doble exigencia para el Juez: en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables (vid. STC 4831-2005-PHC/TC, FJ 8).

Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso.

En sentido jurídico, Osorio (2003) denomina prueba, a un conjunto de actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos a cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones en un litigio.

2.2.1.9.2. En sentido jurídico procesal

En lo procesal según Gonzales (2014), siempre se hace alusión a la prueba o a la carga de la prueba, pero antes esta, existe la denominada “carga de la afirmación”, que la tiene el demandante como el demandado. Al respecto (Eisner, 1964, citado en Gonzales 2014), acoto que “para que se aplique la norma jurídica invocada por las partes al hacer valer su pretensión en juicio es que la parte “afirme” los hechos contenidos en esa norma jurídica”. ejemplificando tenemos si AA, recurre ante el juez expresando que es acreedor de XY (demandado), por causa de un préstamo de dinero que no le ha sido pagado oportunamente; no es suficiente la mera reclamación “que se le pague la deuda” o que se limite solo a invocar la

Así por ejemplo, la pericia sería un medio de prueba que no resiste el supuesto de actuación inmediata ya que el juez debe designar los peritos, esperar que estos acepten el cargo, realicen la pericia, emitan el dictamen y luego se ratifiquen en la pericia y se proceda al debate pericial si lo hubiera, importando ello

una serie de etapas imposibles de agotarse en un solo acto, de manera inmediata, como se espera ocurra en la vía Sumarísima (Ledesma, 2008).

Respecto a la prueba Couture (2002):

La prueba es un método de averiguación y un método de comprobación. En el derecho penal, la prueba es, normalmente, averiguación, búsqueda, procura de algo. Mientras que, en el derecho civil es normalmente, comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. La prueba penal se asemeja a la prueba científica; la prueba civil se parece a la prueba matemática: una operación destinada a demostrar la verdad de otra operación.

2.2.1.9.3. Diferencia entre prueba y medio probatorio

En opinión Tantaleán. O (2016):

Es necesario indicar que para el profesor DEVIS ECHANDÍA, en sentido estricto, por pruebas judiciales se entiende las razones o motivos que sirven para llevar al juez la certeza sobre los hechos; y por medios de prueba, los elementos o instrumentos (testimonios, documentos, etc.), utilizados por las partes y el juez, que suministran esas razones o esos motivos (es decir, para obtener la prueba). Así, puede existir un medio de prueba que no contenga prueba de nada, porque de él no se obtiene ningún motivo de certeza. Pero en sentido general, se entiende por prueba judicial tanto los medios como las razones o los motivos contenidos en ellos y el resultado de ellos y el resultado de estos.

En el ámbito normativo:

El artículo 189 nos señala: Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, salvo disposición distinta de este Código. Una de las consideraciones a tener en cuenta para la admisibilidad de la prueba se relaciona con la oportunidad y forma de su ofrecimiento.

La norma en comentario se refiere a la oportunidad del ofrecimiento de los medios probatorios la que se relaciona con el principio de eventualidad. Para

Monroy este principio está directamente ligado con la diferencia, a veces sutil, que existe entre una estrategia procesal y una conducta maliciosa.

Con el derogado Código de Procedimientos Civiles de 1911 era perfectamente factible que una parte reserve lo más importante de su material probatorio para el último momento de la etapa de prueba a efecto de reducir la capacidad de contradicción del contrario.

Esa situación con el actual Código ha sido trastocada pues las partes tienen la única posibilidad de ofrecer sus medios probatorios con la postulación de la demanda, luego de ella, precluye la oportunidad de insertar medios probatorios salvo que se refieran a hechos nuevos, como es el caso que regula el artículo 429 del CPC. Con este enunciado se busca contrarrestar sorpresas de última hora. Sobre este particular, véase que la incorporación extemporánea de los medios de prueba no priva del contradictorio, pues en el supuesto que se presenten documentos, "el juez corre traslado a la otra parte para que reconozca o niegue la autenticidad de los documentos que se le atribuyen" (Monroy 1992).

En opinión de Hinostroza (1998):

La prueba puede ser concebida estrictamente como las razones que conducen al Juez a adquirir certeza sobre los hechos. Esta característica destaca en el ámbito del proceso.

Los medios probatorios, en cambio, son los instrumentos que emplean las partes u ordena el magistrado de los que se derivan o generan tales razones. Por ejemplo: Puede darse el caso de un medio probatorio que no represente prueba alguna al no poder obtenerse de él ninguna razón que produzca el convencimiento del Juez.

En el ámbito normativo:

En relación a los medios de prueba o medios probatorios, si bien la legislación procesal civil no lo define, pero el contenido más cercano es la norma prevista en el artículo 188° del Código Procesal Civil que establece: "Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes,

producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones” (Cajas, 2011, p. 622).

2.2.1.9.4. Concepto de prueba para el Juez

Según Rodríguez (1995) al Juez no le interesan los medios probatorios como objetos; sino la conclusión a que pueda llegar con la actuación de ellos: si cumplieron o no con su objetivo; en su opinión, los medios probatorios deben estar en relación directa con la pretensión y con el titular del objeto o hecho controvertido.

En el proceso los justiciables están interesados en demostrar la verdad de sus afirmaciones; sin embargo, este interés particular, hasta de conveniencia se podría decir, no lo tiene el Juez.

Para el Juez, la prueba es la comprobación de la verdad de los hechos controvertidos, ya sea que su interés sea encontrar la verdad de los hechos controvertidos, o la verdad para optar por una decisión acertada en la sentencia.

El juez resuelve la base de los elementos aportados por las partes en el proceso y si en caso las pruebas son insuficientes o la parte demandada no ha aportado las pruebas que corresponden en la forma y modo que la norma establece el hecho de que no se le otorgue derecho a una de las partes en razón de lo antes señalado, pese a que la realidad sea distinta.

2.2.1.9.5. El objeto de la prueba

Cafferata. N, 1998 señala Objeto de prueba es aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba. Señala que la prueba puede recaer sobre hechos naturales (v.gr., la caída de un rayo) o humanos, físicos (v.gr., una lesión) o psíquicos (v.gr. intención homicida). También sobre la existencia y cualidades de personas (v.gr., nacimiento, edad, etc.), cosas y lugares.

Según Azula Camacho en dos grandes grupos puede dividirse el criterio respecto de lo que constituye el objeto de la prueba.

Para unos son las afirmaciones contenidas en la demanda y que sustentan las pretensiones o las expuestas en la contestación, como fundamento de las excepciones. Otros consideran que son los hechos, considerados en su más amplia acepción.

Para Ore Guardia hay dos teorías sobre lo que es objeto de prueba: la clásica o tradicional, que considera que son objeto de prueba los hechos; y la moderna según la cual son objeto de prueba las afirmaciones sobre los hechos. Lo que va a lograr el convencimiento del juez es lo que se diga respecto a un hecho. Andrés Ibáñez señala que “el juez no se enfrenta directamente con los hechos, sino con proposiciones relativas a los hechos”.

Paredes Palacios sostiene que lo que se verifica son las afirmaciones, pero para tal propósito es menester probar los hechos que las afirmaciones recogen.

2.2.1.9.6. La carga de la prueba

(Devis, E. 1993) señala. La carga de la prueba es darle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos que es la creencia de conocer la verdad o de que nuestro conocimiento se ajuste a la realidad, lo cual permite adoptar su decisión, sea que esa certeza corresponda a la realidad, en cuyo caso se estará en la verdad, o que se encuentre desligada de ella y exista un error. La justicia humana no puede exigir más, porque no puede aspirar a la infabilidad.

Es importante destacar aquí que si bien lo que se busca en el proceso judicial es la verdad, esta es la llamada verdad procesal ya que el juez resuelve sobre la base de los elementos portados por las partes.

Por su parte Morales (2001) respecta a la carga de la prueba judicial, señala que se reconoce tres posiciones: a) establecer la verdad, b) lograr la convicción del juez y c) alcanzar la fijación formal de los hechos procesales.

En el caso de la primera de estas, señala: según esta teoría, la prueba no es un fin en sí mismo, sino un medio para el descubrimiento de la verdad de los hechos.

Para el caso de la segunda señala que: la finalidad de la prueba está dirigida al juez para provocar en él convicción respecto de los hechos expuestos por las partes y que le permitan sustentar su sentencia.

Finalmente para la tercera posición señala: Esta teoría sostiene que el proceso no sirve para conocer los hechos o establecer la verdad, sino para conseguir su fijación formal.

La carga de la prueba le incumbe al demandante que afirma los hechos que usa para fundamentar su pretensión, o al demandado que los contradice presentando nuevos hechos. Es el principio de aportación de parte, mediante el cual las partes tienen que alegar los hechos reales discutidos dentro del proceso, además de brindar la prueba sobre los mismos. Estos medios probatorios se presentan en los actos de la etapa postulatoria, es decir en la demanda, la contestación y la reconvención (Águila, 2010).

2.2.1.9.7. El principio de la carga de la prueba

Principio del Derecho procesal en virtud del cual se obliga a una de las partes aprobar determinados hechos y circunstancias cuya falta de acreditación conllevaría una decisión adversa a sus pretensiones. La doctrina define la carga de la prueba como «regla de decisión o de juicio que permite al juzgador resolver la controversia en favor de quien no está sometido a ella, en caso de que la prueba aportada no sea concluyente» (Gómez 2016).

Cabe destacar la exposición de Rodríguez (1995) sobre la fuente de la carga de prueba, él precisa que, la fuente legal de carácter general está prevista en el Código Civil; mientras que, la aplicación y los efectos de la carga de la prueba está prevista en el Código Procesal Civil, como quiera que hace mención al artículo VI del Título Preliminar del Código Civil, a efectos de verificar el contenido a continuación se inserta el contenido de dicha norma, el cual indica: “Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción sólo cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley” (Jurista Editores, 2016, p. 29).

No obstante lo expresado por Rodríguez, sobre la fuente de la carga prueba, en este trabajo se advierte lo siguiente: que así como el Código Civil en el artículo VI del título preliminar, hace énfasis sobre el ejercicio de la acción; el Código

Procesal Civil también es enfático al normar sobre el inicio del proceso, y para corroborar lo expuesto se cita el artículo IV del título preliminar donde está escrito lo siguiente: “El proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. (...) (Jurista Editores, 2016, p.457), lo cual, implícitamente, también ratifica que la fuente de la carga de la prueba es de naturaleza legal; pero, esta vez, la norma no es de naturaleza sustantiva; sino, adjetiva.

Provisoriamente pero con bastante proximidad a su descripción definitiva, se ha manifestado que: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse las consecuencias desfavorables” (Devis Echandía)

Señalábamos al principio que el tema que concita nuestra atención es la crónica del fracaso de la actividad probatoria, porque parte de la premisa de que las hipótesis afirmadas por los contradictores no han logrado reunir elementos de prueba suficientes para considerar que se está ante una versión aceptable. (Taruffo 2005)

En el marco normativo, este principio se encuentra prevista en el artículo 196 del Código Procesal Civil, donde se indica: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos” (Jurista Editores, 2016, p. 518).

Así tenemos que “la carga de la prueba nos lleva a interpellarnos; ¿a quién le incumbe probar un supuesto de hecho?, ¿Quién resulta afectado en el proceso por no aparecer probado determinado hecho?, y, en tal sentido determinar que debe probar cada parte en el proceso para lograr el éxito de sus intereses en concomitancia con el principio onus probando” (La carga de la prueba y sus reglas de distribución en el proceso civil., 2017, 19 octubre).

Finalmente, en fuentes jurisprudenciales se encuentra lo siguiente:

La carga de la prueba constituye un medio de gravamen sobre quien alega un hecho, de manera que su incumplimiento determina la absolución de la contraria. Las pruebas deben ser estudiadas en sus elementos como, en sus conexiones directas o indirectas. Ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva sino en su conjunto, por cuanto que solo teniendo la visión integral de los medios probatorios se puede sacar conclusiones en busca de la verdad que es el fin del proceso (Expediente N° 99-23263, 5ta. Sala Civil de Lima, 06/12/01, (Ledezma Narváez, Marianela, Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T. 6, p. 461; citado por Jurista Editores, 2016, p. 519).

Asimismo, se tiene:

“El Código Adjetivo preceptúa que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos (...) en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión” (Expediente N° 1555-95- Lima, VSCS, Alberto Hinostroza M. Jurisprudencia Civil. T. II. p. 112; citado por Cajas, 2011, p. 625).

2.2.1.9.8. Valoración y apreciación de la prueba

(Echeandía 2000), señala que: "por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido".

A su vez (Paredes 1997), indica que: "La apreciación o valoración es acto del juez consistente en medir la eficacia probatoria de cada medio de prueba, o de su conjunto, según el precio o valor que le asigna la ley o le otorgue el juez, en relación al grado de convicción que permita generar certeza en el juez de la ocurrencia del hecho a probar

Sobre el tema (Carrión 2000), refiere que: "Podemos sostener válidamente que la apreciación y valoración de los medios probatorios constituye la fase culminante de la actividad probatoria. Es el momento también en que el Juez puede

calificar con mayor certeza si tal o cual medio probatorio actuado tiene eficacia para convencerlo sobre los hechos alegados y si ha sido pertinente o no su actuación en el proceso.

Como se ha mencionado la valoración de la prueba es efectuada por el Juez, quien debe tener presente tres aspectos, en primer lugar tendrá que percibir los hechos a través de los medios probatorios, los cuales en este sentido pueden ser directos, esto es, el Juez se encuentra en contacto inmediato con el hecho a probar, como sucede con la inspección ocular. En segundo lugar, el Juez deberá efectuar una representación o reconstrucción histórica de los hechos en su conjunto, en este caso además de utilizar los medios directos puede emplear los medios indirectos, los cuales sólo proporcionan datos, a partir de los cuales el Juez elabora un argumento para deducir la existencia de un hecho, como ocurre con los indicios. En tercer lugar, el desarrollará una actividad analítica o de razonamiento mediante la cual se obtienen las inferencias de los datos percibidos.

“Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión” (Jurista Editores, 2016, p. 519).

La apreciación razonada está emparentada con el hecho que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos, ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en la libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia común; se trata de un convencimiento lógico y motivado, basado en elementos probatorios objetivos. (Casación N° 2558-2001-Puno, El Peruano, 01-04-2002, p. 8580).

2.2.1.9.9. Sistemas de valoración de la prueba

Sobre la valoración de la prueba, tomando en cuenta las exposiciones de Rodríguez (1995), Taruffo (2002), y Córdova (2011) se tiene lo siguiente:

2.2.1.9.9.1. El sistema de la tarifa legal

También es conocido como el sistema de la prueba tasada o de la prueba legal, en el mismo se establece la obligación del Juez de mensurar la eficacia probatoria del medio de prueba indicado, según el valor que previamente se ha asignado por la norma jurídica. Devis Echeandía refiere que este sistema sujeta "al juez a reglas abstractas preestablecidas, que le señalan la conclusión que forzosamente debe aceptar en presencia o por la ausencia de determinados medios de prueba. Devis Echeandía (2000).

Al respecto Carrión Lugo refiere que "la ley le atribuye un valor a determinado medio probatorio y el Juez no tiene otro camino que admitirlo así. En este sistema la actividad del Juez se hace mecánica, en donde el juzgador se encuentra impedido de formarse un criterio personal sobre los medios de prueba y, consecuentemente, sobre los hechos acreditados, encontrándose eventualmente obligado a aceptar valoraciones en contra de su propio convencimiento razonado. Carrión Lugo (2000).

Sobre el sistema de la prueba legal Taruffo (2002) expone:

(...) estaba pensado como un conjunto orgánico, cerrado y completo de reglas jurídicas capaces de abarcar cualquier aspecto de la prueba de los hechos en juicio. En este sistema podía tener espacio una concepción únicamente jurídica de la prueba, aunque sólo fuera porque todo criterio o regla referida a la prueba tendía a asumir la vestimenta de regla jurídica, por obra de la doctrina y de la jurisprudencia, cuando no lo establecía directamente el legislador (p. 22).

En síntesis: en éste sistema la prueba legal consiste en la producción de reglas que predeterminan, de forma general y abstracta, el valor que debe atribuirse a cada tipo de prueba.

2.2.1.9.9.2. El sistema de valoración judicial

En opinión de Carrión (2000):

Refiere que: "Podemos sostener válidamente que la apreciación y valoración de los medios probatorios constituye la fase culminante de la actividad probatoria. Es el momento también en que el Juez puede calificar con mayor certeza si tal o cual medio probatorio actuado tiene eficacia para convencerlo sobre los hechos alegados y si ha sido pertinente o no su actuación en el proceso".

La valoración de la prueba es efectuada por el Juez, quien debe tener presente tres aspectos, en primer lugar tendrá que percibir los hechos a través de los medios probatorios, los cuales en este sentido pueden ser directos, esto es, el Juez se encuentra en contacto inmediato con el hecho a probar, como sucede con la inspección ocular. En segundo lugar, el Juez deberá efectuar una representación o reconstrucción histórica de los hechos en su conjunto, en este caso además de utilizar los medios directos puede emplear los medios indirectos, los cuales sólo proporcionan datos, a partir de los cuales el Juez elabora un argumento para deducir la existencia de un hecho, como ocurre con los indicios. En tercer lugar, el desarrollará una actividad analítica o de razonamiento mediante la cual se obtienen las inferencias de los datos percibidos.

En opinión Paredes (2000):

Indica que: "La apreciación o valoración es acto del juez consistente en medir la eficacia probatoria de cada medio de prueba, o de su conjunto, según el precio o valor que le asigna la ley o le otorgue el juez, en relación al grado de convicción que permita generar certeza en el juez de la ocurrencia del hecho a probar.

Precisa, que el derecho a prueba que normalmente está reconocida a las partes, sólo puede adquirir un significado apreciable sobre la base de una concepción racional de la convicción del juez.

El principio de la libre convicción del Juez implica la libertad que éste tiene para escoger el material probatorio existente en el proceso, los elementos que considere significativos y determinantes para la decisión sobre el hecho (...), pero a su vez emerge el deber de motivar, entonces el Juez tendrá que justificar mediante argumentos donde evidencie o enuncie los criterios que adoptó para valorar las pruebas y, sobre esta base, justificar el juicio de hecho.

2.2.1.9.3. Sistema de la Sana Crítica

Según Cabanellas, citado por Córdova (2011) la sana crítica, viene a ser una fórmula legal para entregar al ponderado arbitrio judicial la apreciación de las pruebas (p.138).

Es muy similar al de la valoración judicial o libre convicción, como le llama Taruffo (2002), en éste sistema se propugna que el valor probatorio que estime a determinada prueba, lo realice el Juez, hallándose éste en el deber de analizar y evaluar las pruebas con un criterio lógico y consecuente, sustentando las razones por las cuales le otorga o no eficacia probatoria a la prueba o pruebas.

En opinión de Antúnez, citado por Córdova (2011) éste sistema es similar al sistema de valoración judicial, porque en ambas el valor probatorio no es determinado por una norma procesal ni por el sistema en sí, sino que valor probatorio o peso, lo decide el juzgador. También, precisa que éste sistema difiere del anterior; porque, así como el juzgador está premunido de libertad para asignarle un valor, aquel que considere a una prueba específica; paralelo a ello, también, está obligado a realizar la valoración de acuerdo a una apreciación razonada y crítica; por lo tanto, tendrá que analizar y evaluar las pruebas con un criterio lógico y consecuencia, expresando las razones que justifican la eficacia probatoria que otorgó a la prueba o pruebas.

2.2.1.9.10. Operaciones mentales en la valoración de la prueba

De acuerdo a Rodríguez (1995):

Una valoración adecuada implica tener en cuenta tres condiciones: *liberación de prejuizgamiento* (alejar evitar ideas previas y prejuicios); *conocimiento amplio de las cosas* (requerir si es posible de expertos, como peritos) *examinar los informes periciales y, por último, estudio de todos los medios ofrecidos, como pruebas y actuados en el proceso.*

Asimismo, sobre las operaciones mentales precisa lo siguiente:

A. El conocimiento en la valoración y apreciación de los medios de prueba

De acuerdo a ésta actividad, el conocimiento y la preparación del Juez es necesaria para captar el valor de un medio probatorio, sea objeto o cosa, ofrecido como prueba. Sin el conocimiento previo no se llegaría a la esencia del medio de prueba.

B. La apreciación razonada del Juez

Esta actividad se evidencia cuando el Juez aplica la apreciación razonada; dicho de otro modo, cuando analiza los medios probatorios para valorarlos, con las facultades que le otorga la ley y en base a la doctrina. Dicho razonamiento debe evidenciar un orden lógico de carácter formal; aplicación de conocimientos psicológicos, sociológicos y científicos, porque apreciará tanto documentos, objetos y personas (partes, testigos) y peritos.

La apreciación razonada se convierte, por exigencia de su objetivo, en un método de valoración, de apreciación y determinación o decisión fundamentada.

C. La imaginación y otros conocimientos científicos en la valoración de las pruebas.

Como quiera que los hechos se vinculan con la vida de los seres humanos, raro será el proceso en que para calificar definitivamente el Juez no debe recurrir a recursos cognitivos de tipo psicológicos y sociológicos; las operaciones psicológicas son importantes en el examen del testimonio, la confesión, el dictamen de peritos, los documentos, etc., por eso es imposible prescindir en la tarea de valorar la prueba judicial.

2.2.1.9.11. Finalidad y fiabilidad de las pruebas

. El derecho de las partes de probar tiene por finalidad producir en el juez conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes en los actos postulatorios del mismo. Por ello no solamente constituye un derecho sino también un deber de quien afirma un hecho que este sea debidamente sustentado o corroborado mediante los medios probatorios regulados por la norma

procesal, garantizando esta igualmente, la actuación y valoración de la misma sin afectar los principios procesales y constitucionales que la garantizan. (Rioja 2016)

EL artículo 188 del CPC. Prescribe que los medios de prueba tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Sobre el particular se puede apreciar que se hace alusión a los medios de prueba y no a la prueba, lo que implica un dislate pues los primeros son los instrumentos, en cambio es la prueba la que produce certeza en el juzgador. Asimismo, Verger (2003) sobre la finalidad de la prueba nos dice lo siguiente: Es la de obtener afirmaciones instrumentales depuradas para poder compararlas con las afirmaciones fácticas de las partes.

El fin de la prueba es darle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos, que es la creencia de conocer la verdad o de nuestro conocimiento se ajusta la realidad, lo cual le permite adoptar su decisión, sea que esa certeza corresponda a la realidad, en cuyo caso se estará en la verdad, o que se encuentre desligada de ella y exista un error. La justicia humana no puede exigir más, porque no puede aspirar a la infalibilidad.

2.2.1.9.12. La valoración conjunta

“La valoración significa la operación mental cuyo propósito es percibir el valor convicción que pueda extraerse de su contenido (...). La valoración le compete al Juez que conoce del proceso; representa el punto culminante de la actividad probatoria en el que se advertirá si los conjuntos de medios probatorios cumplen con su finalidad procesal de formar convicción en el juzgador” (p. 103-104).

En lo normativo, se encuentra previsto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, en el cual se contempla: “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión” (Sagástegui, 2003, Vol. I. p. 411).

En fuentes jurisprudenciales citados por Cajas (2011, p. 626) se encuentra lo siguiente:

2.2.1.9.13. El principio de adquisición

Opinión de Devis Echeandía (2000) señala lo siguiente: "...los diversos medios aportados deben apreciarse como un todo, en conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien la aportó, porque no existe un derecho sobre su valor de convicción...Para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni siquiera darle el sentido y alcance que en realidad le corresponda, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos probatorios en el proceso, tomados en su conjunto, como una "masa de pruebas", según la expresión de los juristas ingleses y norteamericanos".

El Principio de Adquisición, consiste en que una vez incorporados al proceso los actos procesales (documentos, etc.) dejan de pertenecer a quien lo realizó y pasan a formar parte del proceso, pudiendo incluso la parte que no participó en su incorporación obtener conclusiones respecto de él. Aquí desaparece el concepto de pertenencia individual, una vez se incorpore el acto al proceso.

2.2.1.9.14. Las pruebas y la sentencia

Concluido el trámite que corresponda en cada proceso, el juzgador debe expedir sentencia, este es el momento cumbre en el cual el juzgador aplica las reglas que regulan a las pruebas.

Según el resultado de la valoración de la prueba, el Juez pronunciará su decisión declarando el derecho controvertido y condenado o absolviendo la demanda, en todo o en parte.

2.2.1.9.15. Medios probatorios actuados en el proceso judicial en estudio

2.2.1.9.15.1. Documento

A. Etimología

El término documentos, proviene del latín documentum, que equivale a “lo que sirve para enseñar” o “escrito que contiene información fehaciente (Sagástegui, 2003).

B. Concepto

“Puede definirse al documento como el instrumento u objeto normalmente escrito, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. Es objeto porque es algo material y de naturaleza real, en el que consta una declaración de voluntad de una persona o varias, o bien la expresión de una idea, pensamiento, conocimiento o experiencia” (Sagástegui, 2003, p. 468).

C. Clases de documento

De conformidad con lo previsto en el Art. 235 y 236 del C.P.C se distinguen dos tipos de documentos: público y privado.

Son públicos:

1. El que otorga un funcionario público en usos de sus atribuciones; y
2. El que otorga el notario público, sean estos documentos como la escritura pública y otros que son otorgados en concordancia con lo que le señala la ley de la materia.

Son privados:

Aquellos que, no cumplen con las características que cumplen los documentos públicos.

2.2.1.10. Las resoluciones judiciales

2.2.1.10.1. Concepto

En sentido general, una resolución es un documento en el cual se evidencia las decisiones adoptadas por una autoridad competente, respecto a una situación concreta

A lo expuesto, puede agregarse que la autoridad si bien se trata de una persona física; pero es quien actúa u obra a nombre y representación de una institución, quien por su naturaleza se vale de personas físicas para expresar su voluntad.

En sentido estrictamente jurídico, puede afirmarse que es el acto procesal que emana del órgano jurisdiccional competente en el cual se pronuncia respecto a las peticiones formuladas por las partes en el proceso, en algunas ocasiones se emite de oficio, porque el estado del proceso así, lo amerita; por ejemplo la advertencia de una nulidad, que detecta el juzgador, en consecuencia en ejercicio del Principio de Dirección del Proceso, el juez de oficio emitirá una resolución a efectos de salvaguardar la validez del proceso.

Las formalidades y demás aspectos, se hallan reguladas en las normas del Código Procesal Civil los cuales son:

“Art. 119°. Forma de los actos procesales. En las resoluciones y actuaciones judiciales no se emplean abreviaturas. Las fechas y las cantidades se escriben con letras. Las referencias a disposiciones legales y a documentos de identidad pueden escribirse en números (...).

Art. 120°. Resoluciones. Los actos procesales a través de los cuales se impulsa o decide al interior del proceso o se pone fin a éste, pueden ser decretos, autos y sentencias.

Art. 121°. Decretos, autos y sentencias. Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. Mediante los autos el juez resuelve la admisibilidad o rechazo de la demanda o de la reconvencción, saneamiento, interrupción, conclusión y la forma especial de conclusión del proceso, el consesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión o improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento.

Mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso, en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.

Art. 122°. Contenido y suscripción de las resoluciones. *Las resoluciones contienen:*

- 1. La indicación del lugar y fecha en que se expiden;*
- 2. El número de orden que les corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expiden;*
- 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o según el mérito de lo actuado,*
- 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente;*
- 5. El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso;*
- 6. La condena en costas y costos y, si procediera, de multas; o la exoneración de su pago; y,*
- 7. La suscripción del Juez y del Auxiliar jurisdiccional respectivo.*

La resolución que no cumpla con los requisitos señalados será nula, salvo los decretos que no requieran cumplir con lo establecido en los incisos 3, 4, 5 y 6, y los autos del expresado en el inciso 6.

La sentencia exigirá en su redacción la separación de sus partes expositiva, considerativa y resolutive.

En primera y segunda instancias, así como en la Corte Suprema, los autos llevan media firma y las sentencias firma completa del Juez o Jueces, si es órgano colegiado. Cuando los órganos jurisdiccionales colegiados expidan autos, sólo será necesaria la conformidad y la firma del número de miembros que hagan mayoría relativa.

Los decretos son expedidos por los Auxiliares Jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su firma completa, salvo aquellos que se expidan por el Juez dentro de las audiencias.

Art. 125°. *Las resoluciones judiciales serán numeradas correlativamente en el día de su expedición, bajo responsabilidad” (Sagástegui, 2003, Vol. I. pp. 286–293; y Cajas, 2011, pp. 597-599).*

2.2.1.10.2. Clases de resoluciones judiciales

De acuerdo a las normas del Código Procesal Civil, existen tres clases de resoluciones:

El decreto: que son resoluciones de tramitación, de desarrollo procedimental, de impulso.

El auto: que sirve para adoptar decisiones, no precisamente sobre el fondo, como por ejemplo la admisibilidad de la demanda.

La sentencia: en el cual, a diferencia del auto, si se evidencia un pronunciamiento de fondo, salvo excepciones como disponen las normas glosadas (cuando se declara improcedente).

2.2.1.11. Medios impugnatorios

2.2.1.11.1. Concepto

Toda resolución debe ser susceptible de impugnación o revisión pues la regla general en materia procesal es la doble instancia, a tal punto que se trata de

un principio del Derecho Procesal actual, contemplados para nosotros en el inciso 6 del artículo 139 de nuestra Carta Magna. Este cuestionamiento de una resolución judicial se hace través de los medios impugnatorios. (Tantaleán2016).

Un medio impugnatorio es el instrumento que la Ley concede a las partes o terceros con interés legítimo para poder solicitar que le propio juez o su superior jerárquicamente realice un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin una anulación o revocación total o parcial. (Monroy 1995).

2.2.1.11.2. Fundamentos de los medios impugnatorios

El fundamento de la existencia de los medios impugnatorios es el hecho de que juzga es una actividad humana, lo cual en realidad es una actividad que se expresa, se materializa en el texto de una resolución, se podría decir que juzgar es la expresión más elevada del espíritu humano. No es sencillo decidir sobre la vida, la libertad, los bienes y demás derechos.

Por las razones, expuestas la posibilidad del error, o la falibilidad siempre estará presente, por esta razón en la Constitución Política se encuentra previsto como principio y derecho de la función jurisdiccional, Artículo 139 Inciso 6, el Principio de la Pluralidad de Instancia, con lo cual se estaría minimizando cual error, sobre todo porque el propósito es contribuir en la construcción de la paz Social (Chaname, 2009).

2.2.1.11.3. Clases de medios impugnatorios

El recurso de reposición, contra los decretos a fin de que el Juez los revoque.

El recurso de apelación, contra las siguientes resoluciones:

Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y las excluidas por convenio entre las partes;

Contra los autos, excepto los excluidos por ley.

El recurso de casación, contra:

a) Las sentencias que expiden las Cortes Superiores;

b) Los autos que expiden las Cortes Superiores que, en revisión, ponen fin al proceso.

El recurso de queja, contra las resoluciones que declaran inadmisibles e improcedentes el recurso de apelación o casación.

2.2.1.11.3. Medio Impugnatorio actuado en el proceso judicial en estudio:

En el expediente investigado se aprecia que no se formuló el recurso de apelación.

2.2.1.12. La sentencia

2.2.1.12.1. Etimología

Orozco (2014), sostiene:

El término Sentencia, proviene del latín "Sententia", con una serie de significados que le dan una esencia particular al concepto de Sentencia. "Sententia" proviene de "sentiens, sentientis" participio activo de "sentire" que significa sentir. Al estudiar la etimología de la palabra nos damos cuenta que una sentencia es más que la decisión de un órgano competente (Juez) hacia una persona que cometió algún fallo por el que debe ser sancionado.

2.2.1.12.2. Concepto

En diversas fuentes y la praxis judicial al referirse a la sentencia, se le identifica como una resolución.

Según León (2008) autor del Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales publicado por la AMAG, la sentencia es: "una resolución jurídica, es aquella, sea de carácter administrativa o judicial, que pone fin a un conflicto mediante una decisión fundamentada en el orden legal vigente" (p.15).

2.2.1.12.3. Requisitos de la Sentencia.

Como toda Resolución, la Sentencia debe contener ciertas exigencias formales para su validez, de acuerdo a lo normado en la norma adjetiva (CPC), Art. 122°- “Contenido y Suscripción de las Resoluciones”, siendo estas lo siguiente:

a). Requisitos Formales.

1. La indicación del lugar y fecha en que se expiden;
2. El número de orden que les corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expiden;
3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado;
4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente;
5. El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso;
6. La condena en costas y costos y, si procediera, de multas; o la exoneración de su pago; y,
7. La suscripción del juez y del auxiliar jurisdiccional respectivo.
8. La sentencia exigirá en su redacción, la separación de sus partes expositiva, considerativa y resolutive.
9. En primera y segunda instancias, así como en la Corte Suprema, los autos llevan media firma y las sentencias firma completa del juez o jueces, si es órgano colegiado.

b). Requisitos Materiales de la Sentencia.

Entre los requisitos de carácter material o sustancial con las que debe cumplir una sentencia, señalada por los doctrinarios es que esta debe ser congruente, motivada y analizada exhaustivamente, la misma que desarrollaremos como principios relevantes del Contenido de la Sentencia.

2.2.1.12.4. Estructura de la sentencia

Según a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, artículo 122 indica:

La estructura de la sentencia comprende la “parte expositiva, considerativa y resolutive”, la primera presenta la exposición sucinta de la posición de las partes básicamente sus pretensiones, en cambio la segunda presenta la fundamentación de las cuestiones de hecho de acuerdo con la valoración conjunta de los medios probatorios, y la fundamentación de las normas a aplicarse al caso concreto; y la tercera evidencia la decisión que el órgano jurisdiccional ha tomado frente al conflicto de intereses.

2.2.1.12.5. La motivación de la sentencia

La emisión de la sentencia es un acto racional, que debe ser argumentado; la sentencia es una operación lógica y esto conlleva que exista un método jurídico y lógico para tomar una decisión. (Colomer, 2003).

2.2.2. Desarrollo de Instituciones Procesales Sustantiva del Expediente en estudio

2.2.2.1. Pretensión judicializada en el proceso en estudio

Visto el petitorio de la demanda y demás piezas procesales, entre ellos las sentencias se evidencia: que la pretensión planteada fue la pension de alimentos (Expediente N°0227-2014-0-184-JP-FC-01).

2.2.2.2. Alimentos

2.2.2.2.1. Concepto

Desde la visión del Doctor Manuel María Campana Valderrama al respecto de los alimentos señala que existe una clasificación especial a) Necesarios, también conocidos como restringidos. Como su nombre lo indica, no es difícil suponer que este tipo de alimentos se refiera a lo estrictamente necesario para vivir, de modo que,

quien deba solo asignara al acreedor alimentista, lo indispensable para su subsistencia. b) Congruos, es la porción que en dinero o en especie se entrega a quien se debe, arregladamente a las posibilidades del deudor o alimentante y por lo tanto, a su nivel de vida.

En el Perú la Constitución Política establece que es deber de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, la división de poderes, también establece las facultades que le corresponden al Poder Judicial es la primera norma del ordenamiento Jurídico y como tal despliega sus efectos con eficacia vinculante para los poderes públicos y los particulares, su importancia como lo ha sostenido nuestro Tribunal Constitucional, radica en que el ordenamiento jurídico nace y se fundamenta en la constitución y no en la Ley.

González. (2007) señala:

a) Tesis patrimonial, de acuerdo a la cual señala que el derecho de alimentos tiene una naturaleza genuinamente patrimonial, puesto que la prestación se cumple con el aporte económico o de bienes sin necesidad de que el deudor se preocupe del cuidado de la persona que recibe los alimentos.

b) Tesis extrapatrimonial, mediante la cual se señala que aunque la obligación de prestar alimentos es personal y aunque se exprese finalmente en una prestación económica esto no perjudica su real naturaleza.

2.2.2.2.2. Clasificación de alimentos

Clasificamos los alimentos en legales y voluntarios; esto dependiendo de la fuente de la obligación, tal como ya lo hemos explicado anteriormente.

2.2.2.2.3. Obligación alimentaria.

Clasificamos los alimentos en legales y voluntarios; esto dependiendo de la fuente de la obligación, tal como ya lo hemos explicado anteriormente.

2.2.2.2.3.1. Condiciones para ejercer el derecho

Los presupuestos básicos o condiciones para ejercer el derecho alimentario son tres a saber: estado de necesidad en quien lo solicita, posibilidad económica del deudor u obligado alimentario y una norma legal que establezca esta obligación. Analizaremos cada una de ellas:

2.2.2.2.3.2. Teoría sobre pensión de alimentos

El derecho de Alimentos es una parte del Derecho Familiar peruano, cuyo fin es promover el auxilio familiar entre parientes en estado de necesidad. Una de las formas de lograr su obtención es iniciar un proceso ante el Poder Judicial, siendo el resultado del mismo la determinación de una pensión alimentaria a favor de un niño o adolescente, u otro miembro de la familia, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas que garanticen su desarrollo integral o supervivencia.

En este orden de ideas, los criterios para establecer la pensión de Alimentos (necesidad del alimentista y capacidad del obligado) están reconocidos expresamente en el Código Civil

Peruano (1984); sin embargo, el contenido de los mismos no se encuentra explícitamente delimitado, por lo que, en su labor interpretativa, el Juez le otorga contenido.

2.3. Marco conceptual

Caracterización. Atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás (Real Academia Española, s.f)

Carga de la prueba. Obligación consistente en poner a cargo de un litigante la demostración de la veracidad de sus proposiciones de hecho en un juicio. El requerimiento es facultad de la parte interesada de probar su proposición. Obligación procesal a quién afirma o señala (Poder Judicial, s.f).

Derechos fundamentales. Conjunto básico de facultades y libertades garantizadas judicialmente que la constitución reconoce a los ciudadanos de un país determinado (Poder Judicial, s.f).

Distrito Judicial. Parte de un territorio en donde un Juez o Tribunal ejerce jurisdicción (Poder Judicial, s.f.).

Doctrina. Conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aun no legisladas. Tiene importancia como fuente mediata del Derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes (Cabanellas, 1998).

Ejecutoria. (Derecho Procesal) Sentencia firme, la que ha adquirido autoridad de cosa juzgada, es decir, contra la que no puede interponerse ningún recurso y puede ejecutarse en todos sus extremos (Poder Judicial, s.f).

Expediente: Es el conjunto de escritos, actas y resoluciones donde se encuentran consignados todos los actos procesales realizados en un proceso, los cuales son ordenados según la secuencia de su realización en folios debidamente numerados correlativamente (Poder Judicial, 2013).

Expresa. Claro, evidente, especificado, detallado. Ex profeso, con intención, voluntariamente de propósito (Cabanellas, 1998).

Evidenciar. Hacer patente y manifiesta la certeza de algo; probar y mostrar que no solo es cierto, sino claro (Real Academia Española, 2001).

Matriz de Consistencia: Es un instrumento de varios cuadros formado por columnas y filas y permite evaluar el grado de coherencia y conexión lógica entre el título, el problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el tipo, método, diseño de investigación la población y la muestra de estudio. (Rojas, 2010)

Normatividad

Cualidad de normativo (Real Academia de la Lengua Española, 2001).

Parámetro

Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. (Real Academia de la Lengua Española, 2001).

Rango

Amplitud de la variación de un fenómeno entre un mínimo y un máximo, claramente especificados (Diccionario de la lengua española. s.f. párr.2).

Variable

Una variable es un símbolo constituyente de un predicado, fórmula, algoritmo o de una proposición (Real Academia Española, 2018).

2.4 Hipótesis

El proceso judicial sobre Alimentos en el expediente N°0227-2014-0-184-JP-FC-01; Primer Juzgado de Paz Letrado, Distrito Judicial de Lima, evidencia las siguientes características: cumplimiento de plazo, claridad de las resoluciones, congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes, condiciones que garantizan el debido proceso, congruencia de los medios probatorios admitidos con la pretensión planteada y los puntos controvertidos, asimismo: los hechos expuestos, sobre alimentos son idóneas para sustentar la pretensión invocada.

IV. METODOLOGÍA

4.1. Tipo y nivel de la investigación

4.1.1. Tipo de investigación. La investigación será de tipo cuantitativa – cualitativa (Mixta).

Cuantitativa. Cuando la investigación se inicia con el planteamiento de un problema de investigación, delimitado y concreto; se ocupa de aspectos específicos externos del objeto de estudio y el marco teórico que guía la investigación es elaborado sobre la base de la revisión de la literatura (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

En ésta propuesta de investigación se evidenciará el perfil cuantitativo; porque, se inicia con un problema de investigación especificado, habrá uso intenso de la revisión de la literatura; que facilitó la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis de investigación; la operacionalización de la variable; el plan de recolección de datos y análisis de los resultados.

Cualitativa. Cuando la investigación se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones, sobre todo de lo humano (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

El perfil cualitativo del proyecto, se evidenciará en la simultánea concurrencia del análisis y la recolección, porque son actividades necesarias para identificar los indicadores de la variable. Además; el proceso judicial (objeto de estudio) es un producto del accionar humano, que están evidenciados en el desarrollo del proceso judicial, donde hay interacción de los sujetos del proceso buscando la controversia planteada; por lo tanto, para analizar los resultados se aplicará la hermenéutica (interpretación) basada en la literatura especializada desarrollada en las bases teóricas de la investigación, sus actividades centrales serán: a) sumersión al contexto perteneciente al proceso judicial (para asegurar el acercamiento al fenómeno y, b) Ingresar a los compartimentos que componen

al proceso judicial, recorrerlos palmariamente para reconocer en su contenido los datos correspondientes a los indicadores de la variable.

En síntesis, según Hernández, Fernández y Batista, (2010) la investigación cuantitativa – cualitativa (mixta) “(...) implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (p. 544). En el presente trabajo, la variable en estudio tiene indicadores cuantificables; porque son aspectos que deben manifestarse en distintas etapas del desarrollo del proceso judicial (claridad, cumplimiento de plazos y congruencia); por lo tanto, pueden cuantificarse y a su vez interpretarse de acuerdo a las bases teóricas para facilitar la obtención de las características del fenómeno estudiado.

4.1.2. Nivel de investigación. El nivel de la investigación será exploratorio y descriptivo.

Exploratoria. Cuando la investigación se aproxima y explora contextos poco estudiados; además la revisión de la literatura revela pocos estudios respecto a las características del objeto de estudio (procesos judiciales) y la intención es indagar nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

Respecto al objeto de estudio, no es viable afirmar que se agotó el conocimiento respecto a la caracterización de procesos judiciales reales, y si bien, se insertaron antecedentes estos, son próximos a la variable que se propone estudiar en el presente trabajo, además será de naturaleza hermenéutica.

Descriptiva. Cuando la investigación describe propiedades o características del objeto de estudio; en otros términos, la meta del investigador(a) consiste en describir el fenómeno; basada en la detección de características específicas. Además, la recolección de la información sobre la variable y sus componentes, se manifiesta de manera independiente y conjunta, para luego ser sometido al análisis. (Hernández, Fernández & Batista, 2010)

En opinión de Mejía (2004) en las investigaciones descriptivas el fenómeno es sometido a un examen intenso, utilizando exhaustiva y permanentemente las bases teóricas para facilitar la identificación de las características existentes en él, para luego estar en condiciones de definir su perfil y arribar a la determinación de la variable.

En la presente investigación, el nivel descriptivo, se evidenciará en diversas etapas: 1) en la selección de la unidad de análisis (Expediente judicial, porque es elegido de acuerdo al perfil sugerido en la línea de investigación: proceso contencioso, concluido por sentencia, con interacción de ambas partes, con intervención mínima de dos órganos jurisdiccionales) y 2) en la recolección y análisis de los datos, basada en la revisión de la literatura y orientados por los objetivos específicos.

4.2. Diseño de la investigación

No experimental. Cuando el fenómeno es estudiado conforme se manifestó en su contexto natural; en consecuencia, los datos reflejarán la evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad del investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

Retrospectiva. Cuando la planificación y recolección de datos comprende un fenómeno ocurrido en el pasado (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

Transversal. Cuando la recolección de datos para determinar la variable, proviene de un fenómeno cuya versión pertenece a un momento específico del desarrollo del tiempo (Supo, 2012; Hernández, Fernández & Batista, 2010).

En el presente estudio, no habrá manipulación de la variable; por el contrario, las técnicas de la observación y análisis de contenido se aplicará al fenómeno en su estado normal, conforme se manifestó por única vez en un tiempo pasado. Los datos serán recolectados de su contexto natural, que se encuentran registrados en la base documental de la investigación (expediente judicial) que contiene al objeto de estudio (proceso judicial) que se trata de un fenómeno acontecido en un lugar y

tiempo específico pasado. El proceso judicial, es un producto del accionar humano quien premunido de facultades otorgados por la ley interactúa en un contexto específico de tiempo y espacio, básicamente son actividades que quedaron registrados en un documento (expediente judicial).

Por lo expuesto, el estudio será no experimental, transversal y retrospectivo.

4.3. Unidad de análisis

En opinión de Centty, (20006): “Son los elementos en los que recae la obtención de información y que deben de ser definidos con propiedad, es decir precisar, a quien o a quienes se va a aplicar la muestra para efectos de obtener la información” (p.69).

Las unidades de análisis pueden escogerse aplicando los procedimientos probabilísticos y los no probabilísticos. En el presente estudio se utilizó el procedimiento no probabilístico; es decir, aquellas que “(...) no utilizan la ley del azar ni el cálculo de probabilidades (...). El muestreo no probabilístico asume varias formas: el muestreo por juicio o criterio del investigador, el muestreo por cuota y muestreo accidental (Arista, 1984; citado por Ñaupás, Mejía, Novoa, y Villagómez, 2013; p. 211).

En el presente trabajo la selección de la unidad análisis se realiza mediante muestreo no probabilístico (muestreo intencional) respecto al cual Arias (1999) precisa “es la selección de los elementos con base en criterios o juicios del investigador” (p.24). En aplicación de lo sugerido por la línea de investigación, la unidad de análisis es un expediente judicial, que registra un proceso contencioso, con interacción de ambas partes, concluido por sentencia, y con participación mínima de dos órganos jurisdiccionales, su pre existencia se acredita con la inserción de datos preliminares de la sentencia sin especificar la identidad de los sujetos del proceso (se les asigna un código) para asegurar el anonimato, se inserta como

anexo

1.

4.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores

Respecto a la variable, en opinión de Centty (2006, p. 64):

“Las variables son características, atributos que permiten distinguir un hecho o fenómeno de otro (Persona, objeto, población, en general de un Objeto de Investigación o análisis), con la finalidad de poder ser analizados y cuantificados, las variables son un Recurso Metodológico, que el investigador utiliza para separar o aislar los partes del todo y tener la comodidad para poder manejarlas e implementarlas de manera adecuada”.

En el presente trabajo la variable será: características del proceso judicial de divorcio por la causal de separación de hecho.

Respecto a los indicadores de la variable, Centty (2006, p. 66) expone:

Son unidades empíricas de análisis más elementales por cuanto se deducen de las variables y ayudan a que estas empiecen a ser demostradas primero empíricamente y después como reflexión teórica; los indicadores facilitan la recolección de información, pero también demuestran la objetividad y veracidad de la información obtenida, de tal manera significan el eslabón principal entre las hipótesis, sus variables y su demostración.

Por su parte, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, (2013) refieren: “los indicadores son manifestaciones visibles u observables del fenómeno” (p. 162).

En el presente trabajo, los indicadores son aspectos susceptibles de ser reconocidos en el interior del proceso judicial, son de naturaleza fundamental en el desarrollo procesal, prevista en el marco constitucional y legal.

En el cuadro siguiente se observa: la definición y operacionalización de la variable del proyecto.

Cuadro 1. Definición y operacionalización de la variable en estudio

Objeto de estudio	Variable	Indicadores	Instrumento
<p>Proceso judicial</p> <p>Recurso físico que registra la interacción de los sujetos del proceso con el propósito de resolver una controversia.</p>	<p>Características</p> <p>Atributos peculiares del proceso judicial en estudio, que lo distingue claramente de los demás.</p>	<p>Cumplimiento de plazo</p> <p>Claridad de las resoluciones</p> <p>Congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes</p> <p>Condiciones que garantizan el debido proceso</p> <p>Congruencia de los medios probatorios admitidos con la(s) pretensión (es) planteadas y los puntos controvertidos establecidos.</p> <p>Idoneidad de los hechos expuestos para sustentar la pretensión sobre alimentos</p>	<p>Guía de observación</p>

4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos

Para el recojo de datos se aplicarán las técnicas de la *observación*: punto de partida del conocimiento, contemplación detenida y sistemática, y *el análisis de contenido*: punto de partida de la lectura, y para que ésta sea científica debe ser total y completa; no basta captar el sentido superficial o manifiesto de un texto sino llegar a su contenido profundo y latente (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez; 2013).

Ambas técnicas se aplicarán en diferentes etapas de la elaboración del estudio: en la detección y descripción de la realidad problemática; en la detección del problema de investigación; en el reconocimiento del perfil del proceso judicial; en la interpretación del contenido del proceso judicial; en la recolección de datos, en el análisis de los resultados, respectivamente.

El instrumento a utilizar será una guía de observación, respecto al instrumento (Arias, 1999, p.25) indica: (...) son los medios materiales que se emplean para recoger y, almacenar la información”. En cuanto a la guía de observación Campos y Lule (2012, p. 56) exponen “(...) es el instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación; también es el medio que conduce la

recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. El contenido y diseño está orientado por los objetivos específicos; es decir saber qué se quiere conocer, focalizándolo en el fenómeno o problema planteado, se inserta como **anexo 2**.

En esta propuesta la entrada al interior del proceso judicial estará orientada por los objetivos específicos utilizando la guía de observación, para situarse en los puntos o etapas de ocurrencia del fenómeno para detectar sus características, utilizando para ello las bases teóricas que facilitarán la identificación de los indicadores buscados.

4.6. Procedimiento de recolección y, plan de análisis de datos

Será por etapas, cabe destacar que las actividades de recolección y análisis prácticamente serán concurrentes; al respecto Lenise Do Prado; Quelopana Del Valle; Compean Ortiz, y Reséndiz González (2008) exponen:

La recolección y análisis de datos, estará orientada por los objetivos específicos con la revisión constante de las bases teóricas, de la siguiente forma:

4.6.1. La primera etapa. Será una actividad abierta y exploratoria, para asegurar la aproximación gradual y reflexiva al fenómeno, orientada por los objetivos de la investigación y cada momento de revisión y comprensión será conquista; un logro basado en la observación y el análisis. En esta fase se concreta, el contacto inicial con la recolección de datos.

4.6.2. Segunda etapa. También será una actividad, pero más sistémica que la anterior, técnicamente en términos de recolección de datos, igualmente, orientada por los objetivos y la revisión permanente de las bases teóricas para facilitar la identificación e interpretación de los datos.

4.6.3. La tercera etapa. Igual que las anteriores, una actividad; de naturaleza más consistente que las anteriores, con un análisis sistemático, de

carácter observacional, analítica, de nivel profundo orientada por los objetivos, donde se articularán los datos y las bases teóricas.

Estas actividades se manifestarán desde el momento en que el investigador, aplique la observación y el análisis en el objeto de estudio; (proceso judicial - fenómeno acontecido en un momento exacto del decurso del tiempo, documentado en el expediente judicial); es decir, la unidad de análisis, como es natural a la primera revisión la intención no será precisamente recoger datos; sino, reconocer, explorar su contenido, apoyado en las bases teóricas que conforman la revisión de la literatura.

A continuación, la investigadora empoderada de recursos cognitivos, manejará la técnica de la observación y el análisis de contenido; orientado por los objetivos específicos usando a su vez, la guía de observación que facilitará la ubicación del observador en el punto de observación; esta etapa concluirá con una actividad de mayor exigencia observacional, sistémica y analítica, basada en la revisión constante de las bases teóricas, cuyo dominio es fundamental para interpretar los hallazgos; finalmente, el ordenamiento de los datos dará lugar a los resultados.

4.7. Matriz de consistencia lógica

En opinión de Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2013): “La matriz de consistencia es un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con cinco columnas en la que figura de manera panorámica los cinco elementos básicos del proyecto de investigación: problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, y la metodología” (p. 402).

Por su parte, Campos (2010) expone: “Se presenta la matriz de consistencia lógica, en una forma sintética, con sus elementos básicos, de modo que facilite la comprensión de la coherencia interna que debe existir entre preguntas, objetivos e hipótesis de investigación” (p. 3).

En el proyecto se utiliza el modelo básico suscrito por Campos (2010) al que se agregará el contenido de la hipótesis para asegurar la coherencia de sus respectivos contenidos. A continuación, la matriz de consistencia de la presente investigación en su modelo básico.

Cuadro 2. Matriz de Consistencia

Título: Caracterización del proceso sobre divorcio por causal de separación de hecho en el expediente N° 00041-2014-0-1808-JR-FC-01 del Distrito Judicial de Lima Este-Lima, 2019

G/E	PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS
General	¿Cuáles son las características del proceso judicial sobre alimentos en el expediente N°0227-2014-0-184-JP-FC-01 del Distrito Judicial de Lima - Perú, 2018	Determinar las características del proceso judicial sobre alimentos en el expediente N° 0227-2014-0-184-JP-FC-01 del Distrito Judicial de Lima -Perú, 2018	El del proceso sobre alimentos N° 0227-2014-0-184-JP-FC-01 del Distrito Judicial de Lima - Perú, 2018, evidencia las siguientes características: cumplimiento de plazo, claridad de las resoluciones, congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes, condiciones que garantizan el debido proceso y congruencia de los medios probatorios admitidos con la(s) pretensión(es) planteada y los puntos controvertidos
Específico	¿Se evidencia cumplimiento de plazos, en el proceso judicial	Identificar el cumplimiento de plazos, en el proceso judicial en estudio	En el proceso judicial en estudio, si se evidencia cumplimiento de plazos.
	¿Se evidencia claridad de las resoluciones, en el proceso judicial en estudio?	Identificar la claridad de las resoluciones, en el proceso judicial en estudio	En el proceso judicial en estudio si se evidencia claridad de las resoluciones
	¿Se evidencia congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes en el proceso judicial en estudio?	Identificar la congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes, en el proceso judicial en estudio	En el proceso judicial en estudio si se evidencia congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes.
	¿Se evidencia condiciones que garantizan el debido proceso, en el proceso judicial en estudio?	Identificar las condiciones que garantizan el debido proceso, en el proceso judicial en estudio	En el proceso judicial en estudio si se evidencia condiciones que garantizan el debido proceso.
	¿Se evidencia congruencia de los medios probatorios admitidos con la(s) pretensión(es) planteadas y los puntos controvertidos establecidos, en el proceso judicial en estudio?	Identificar la congruencia de los medios probatorios admitidos con la(s) pretensión(es) planteadas y los puntos controvertidos establecidos, en el proceso judicial en estudio.	En el proceso judicial en estudio si se evidencia congruencia de los medios probatorios admitidos con la(s) pretensión(es) planteadas y los puntos controvertidos establecidos.
	¿Los hechos expuestos en el proceso son idóneos para sustentar la pretensión de alimentos?	Identificar si los hechos expuestos en el proceso, son idóneos para sustentar la pretensión de alimentos.	Los hechos expuestos en el proceso, si son idóneos para sustentar la pretensión de alimentos.

4.8. Principios éticos

Como quiera que los datos requieren ser interpretados, el análisis crítico del objeto de estudio (proceso judicial) se realizará dentro de los lineamientos éticos básicos: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, y relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2011) asumiendo compromisos éticos antes, durante y después del proceso de investigación; para cumplir el principio de reserva, el respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad (Abad y Morales, 2005).

Con este fin, el investigador suscribirá una declaración de compromiso ético para asegurar la abstención de términos agraviantes, difusión de los hechos judicializados y datos de la identidad de los sujetos del proceso, habidos en la unidad de análisis; sin enervar la originalidad y veracidad del contenido de la investigación de conformidad al Reglamento de Registro de Grados y Títulos publicado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) (El Peruano, 8 de setiembre del 2016) **Anexo 3.**

V. RESULTADOS

5.1. Resultados

Cuadro 1. Respeto del cumplimiento de plazos

Los plazos se cumplen de parte de los justiciables, en cambio respecto de los operadores jurídicos parcialmente. En términos de calificación de la demanda, la contestación, los plazos son rigurosos, de parte del juzgador, con indicios parciales para la emisión de la sentencia, probablemente por la existencia de carga procesal. En cuanto a las partes, éstos se cumplieron.

Cuadro 2. Respeto de la claridad de las resoluciones

Las construcciones del texto o contenido de las resoluciones evidenciaron claridad, no hay términos complejos que desentrañar su significado.

Cuadro 3. Respeto la congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes

Conforme al proceso, los puntos controvertidos fueron determinar si se cumple con los requisitos para determinar el estado de necesidad del alimentista, solicitado por la demandante, tomando en cuenta las pruebas ofrecidas en el proceso judicial y discutidas en la audiencia de pruebas.

Cuadro: 4. Respeto a las condiciones que garantizan el debido proceso.

De acuerdo al proceso se observa que se cumplieron con las garantías del debido proceso para las partes haciendo uso de sus derechos de defensa, presentando los recursos impugnatorios en caso de no estar conforme con lo resuelto por el juzgado.

Cuadro 5: Respeto a la congruencia de los medios probatorios admitidos con las pretensiones planteadas y los puntos controvertidos.

De acuerdo a los medios presentados por las partes el proceso judicial en estudio se aprecian que han sido idóneos para acreditar la existencia de la pretensión invocada, y que guarda relación con los puntos controvertidos.

Cuadro 6. Respecto a los hechos expuestos para invocar la pretensión sobre Pension de Alimentos en el proceso son idóneos.

Los hechos, de inicio fueron bien calificados donde nos permite la concordancia o armonía entre la pretensión y la resolución que se pronuncia sobre ella, dicho de otra manera que el juez, por respeto al principio de congruencia no puede ni debe resolver más allá de la pretensión.

5.2. Análisis de resultados

En términos generales, respecto de los plazos, puede afirmarse que éste componente existe y es exigible para las partes y el juzgador, porque se encuentran regulados en normas de tipo público, por lo tanto, su aplicación es estricto cumplimiento, inclusive constriñe al Estado, cuando integra a las partes que se manifiestan en un conflicto de interés (demanda, demandante, juez, etc.). Donde cumplen con los plazos establecidos para las partes y para el órgano jurisdiccional competente donde se celebra el conflicto, pero, probablemente por la problemática que suscite en la administración de justicia (carga procesal, lentitud, etc.), el incumplimiento de los plazos para el juzgador no es percibido en el proceso, en cambio para las partes, traería consecuencias, como se les declare en rebeldía si no contesta la demanda o quedar consentida la sentencia si no se impugna.

En cuanto a la claridad, es un componente de un derecho, de los justiciables, esto sería su derecho a comprender, y el garante es el juzgador, es un punto que progresivamente se viene asegurando en la práctica judicial.

Sobre la congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes; este es un elemento extraído de las versiones que las partes tienen sobre la pretensión planteada, en el sentido que tienen versiones diferentes sobre un mismo hecho, en lo que corresponde al proceso si fueron tomados pertinentemente de lo dicho en el texto de la demanda, y la contestación de la demanda.

De plano se adjuntaron medios probatorios, idóneos y relacionados con la pretensión planteada, entre ellos la partida de nacimiento del menor.

Sobre la congruencia de los medios probatorios actuados, fueron aptos para resolver los puntos controvertidos y las pretensiones planteadas; en cuanto a la calificación de la demanda, cumplieron con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad previstos en los artículos 130, 424 y 425 del código procesal civil para hacer viable su tutela jurisdiccional de la parte accionante.

La idoneidad de los hechos, se evidencia la existencia del fundamento de las acciones del conflicto que comprende las exigencias y requisitos que la ley establece para establecer la pensión de alimentos, donde en primera instancia se le concede la pretensión del demandante y en segunda instancias se confirma.

VI. CONCLUSIONES

En síntesis, en aplicación de la metodología y los propósitos establecidos en el presente trabajo, se puede concluir que: en el proceso N°0227-2014-0-184-JP-FC-01; del Distrito Judicial de Lima - Perú, 2018, Sobre Alimentos sus características fueron:

En el cumplimiento de plazo, se cumplieron para las partes, pero no para el juzgador, ya que se observa que el proceso se dilato mas tiempo de lo que establece la norma.

En términos de claridad, las resoluciones evidenciaron un texto asequible al conocimiento y comprensible para las partes.

Sobre las condiciones que garantizan el debido proceso se observa que ambas partes ejercieron su derecho de defensa siendo debidamente asesorado.

En cuestiones de congruencia de los puntos controvertidos con la posición de las partes; se detectó razonables, porque en la determinación de los puntos de discrepancia se usó los fundamentos de hecho expuestos por las partes, en la etapa postulatoria.

En lo que va con la congruencia de los medios probatorios se resolvió de acuerdo a los puntos controvertidos y las pretensiones planteadas; se halló razonabilidad, y coherencia.

Finalmente, sobre la idoneidad de los hechos, fueron correctos para calificar y peticionar la pretensión de Alimentos.

Al término del trabajo, puede afirmarse que la hipótesis se corroboró en forma parcial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguila, G. (2015). El ABC del derecho procesal civil. Lima: San Marcos E.I.R.L.
- Aguilar, L. B. (2016). Tratado de familia. Lima: Lex & Iurus.
- Bautista, T. P. (2014). Teoría General del Proceso Civil. Lima: Editorial Ediciones Jurídicas.
- Kerlinger, Fred (2008). Investigación del Comportamiento". Editorial Mcgraw Hill. México D.F.
- Melendez, Willy (2011). "Técnicas de investigación cuantitativa". Editorial Crea. Lima - Perú.
- Mendez, Rosmery (2001). "Investigación, fundamentos y metodología". Editorial Pearson. México D.F. pág., 111.
- Martínez Sañudo. (2003). Tesis: "Línea Jurisprudencia! De alimentos". Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Jurídicas". Bogotá-Colombia.
- Ortolan, Marcos (1847). "Instituciones de Justiniano. Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justinian'o". Madrid - España.
- Palacios (2012). "La familia como contexto de desarrollo humano. Familia y desarrollo humano. Editorial Alianza. Madrid- España. PERALTA, Juan (2008). Derecho de Familia en el Código Civil. Editorial Idemsa. Lima-Perú.
- Placido Vilcachagua, Alex (2005). "Los alimentos desde una perspectiva de los derechos del niño" Revista Actualidad Jurídica. Lima.
- Ramos Ríos, Miguel"Protección de la Pensión de alimentos en el Perú", Editorial Idemsa. Lima 2008.
- Sánchez Román. Felipe (1912). "Estudio de Derecho Civil. Vol. II; Derecho de Familia"; Madrid- España.
- Sanchez, C. (1998). "Metodología de la Investigación Científica". Editoria Lumbreras. Lima- Perú. pág. 57.

- Valderrama Campana, Manuel. (2005). "El impago de las prestaciones alimentarias en América Latina". Editorial El escriba. Buenos Aires- Argentina.
- Valderrama Mendoza, S. (2007). "Pasos Para Elaborar Proyectos y Tesis de Investigación Científica". Lima Perú: San Marcos. p.28.
- Zamora, Miguel (2006). "Estadística Descriptiva". Editorial San Marcos. Lima -Perú.
- Cabanellas; G.; (1998); Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Actualizada, corregida y aumentada. (25ta Edición). Buenos Aires: Heliasta
- Expediente N° 0227-2014-0-184-JP-FC-01; primer juzgado paz letrado, , Distrito Judicial Lima - Perú. 2018
- Herrera, L. (2014). La Calidad en el Sistema de Administración de Justicia. Universidad ESAN. Recuperado de: <https://www.esan.edu.pe/publicaciones/Luis%20Enrique%20Herrera.pdf>
- Hinostroza, A. (1998). La prueba en el proceso civil. (1a ed.). Lima: Gaceta Jurídica.
- Hinostroza, A. (2012). Derecho Procesal Civil. Proceso de Conocimiento. T. VII. Lima: Jurista Editores
- Jurista Editores, (2016). Código Civil. (s. edic). Editorial: Jurista Editores. Lima: Jurista editores
- Lalama Jaramillo, I. (2013). *protección al cónyuge débil en el divorcio*. Quito: Universidad San Francisco de Quito.
- Ledesma Narváez, M. (2015). "Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva". En M. Ledesma Narvaez, Comentarios al Código Procesal Civil (p. 29). Lima: Gaceta Jurídica.
- Ledesma Narváez, M. (2015). "Jurisdicción y Acción". En M. Ledesma Narváez, Comentarios al Código Procesal Civil (p. 73). Lima: Gaceta Jurídica.

- Orozco, D. (2014). Definición de sentencia. Recuperado el 12 de octubre de 2017, de [www.concepto-definición: http://conceptodefinición.de/sentencia/](http://concepto-definición: http://conceptodefinición.de/sentencia/)
- Ovalle Favela, José (2016). Teoría General del Proceso, Séptima Edición.
- Paniagua, E. L. (2015). La administración de justicia en España: las claves de su crisis. Obtenido de: <http://www.revistadelibros.com/discusión/1-administracion-dejusticia-en-españa-las-claves-de-su-crisis>
- Peralta, J. (1996). Derecho de Familia; (2da. Edic) Lima: Editorial IDEMSA. Plácido A. (1997). Ensayos sobre Derecho de Familia. Lima: RODHAS.
- Plácido, A. (2008). Manual de Derecho de Familia. Lima: Gaceta Jurídica.
- Rocco. (2014). “Competencia Civil”. En M. Castillo Quispe, & E. Sánchez Bravo, Manual de Derecho Procesal Civil (p. 61). Lima: Jurista editores.
- Sagástegui, P. (2003). Exégesis y Sistemática del Código Procesal Civil. T.I. (1a ed). Lima: Grijley.
- Sagástegui, P. (2003). Exégesis y Sistemática del Código Procesal Civil. T. II. (1a ed.). Lima: Grijley.
- Ticona, V. (1994). Código Procesal Civil. Comentarios, material de estudio y doctrina. (2da Edición). Arequipa: Universidad Nacional de Arequipa
- Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, (2017). Reglamento de Investigación Versión 9. Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 003-2017-CU- ULADECH Católica, de fecha 04 de enero de 2017

**A
N
N
E
X
O
S**

Anexo 1: Evidencia para acreditar la Pre – existencia del objeto de estudio:
proceso judicial

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO LIMA

EXPEDIENTE N° : 00227-2014-0-1824-JP-FC-01
MATERIA : ALIMENTOS
DEMANDANTE : “A”
DEMANDADA : “B”
JUEZ : “E”
ESPECIALISTA : “F”

SENTENCIA

Resolución Nro 8

Lima, veinticinco de mayo del año

Dos mil quince.-

VISTOS. Resulta que por escrito corriente de autos doña **A.** interpone demanda de **ALIMENTOS** contra **B.** a fin que cumpla con acudir a favor de sus menores hijos **D.** y **F,** con una pensión alimenticia mensual no menor de tres mil y 00/100 nuevos soles.

FUNDAMENTACION FACTICA DE LA DEMANDA:

Sostiene la demandante que producto de sus relaciones con el demandado procrearon a ambos menores. Que el demandado viene incumpliendo con sus obligaciones tanto morales como legales de cubrir a sus menores hijos a quienes no suministra alimentos a los que está obligado. Sostiene que se ha visto imposibilitada de atender a las necesidades más apremiantes de sus menores hijos habiendo sido solventados con ayuda de sus familiares no obstante que los gastos de los menores aumentan dado que se encuentran en edad escolar. Que el demandado se encuentra en buena

situación económica ya que viene laborando con el vehículo de su propiedad y no concurre con otros gastos por lo que estando a la obligación del padre de acudir a sus hijos es que acude al órgano judicial en busca de tutela jurisdiccional.

FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA DEMANDA:

Fundamenta jurídicamente su demanda en lo previsto por el artículo 472 del código civil y demás pertinente.

DE LA TRAMITACION DE LA CAUSA:

Que admitida a trámite la demanda por resolución uno se corrió el traslado de ley, siendo absuelta por el demandado conforme a los términos de su escrito corriente en autos, señalándose fecha de audiencia única la cual se llevo a cabo con arreglo al acta obrante en autos, por lo que no habiendo medios probatorios pendientes de actuación, la causa queda expedita para sentenciar.

DE LOS CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA:

PRIMERO: Que conforme lo establece la constitución política del Perú en su artículo 6 segundo párrafo, “*es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos*”. Qué asimismo, el artículo 13 de la citada carta magna señala que los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos.

SEGUNDO: Que la presente causa se ha tramitado con arreglo a lo previsto por el proceso único del CNA concordante con el artículo 546 y siguientes del código procesal civil.

TERCERO. Que, es petitorio de la demanda interpuesta se fije alimentos a cargo del demandado a favor de sus menores hijos por una suma no menor de tres mil y 00/100 nuevos soles.

CUARTO: Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 472 del código civil modificado por ley 30292 , se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación según la situación y posibilidades de la familia; Que el artículo 474 inciso 1 y 2 del código civil señala que se deben recíprocamente alimentos: los cónyuges y los ascendientes y descendientes

QUINTO: Que, el artículo 481 del código civil establece los criterios para fijar los alimentos señalando que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las

necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe prestarlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente las obligaciones a que se halle sujeto el deudor.

SEXTO: Que, conforme al artículo 188 del código procesal civil, los medios probatorios tiene por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Que el artículo 196 del precitado cuerpo de leyes señala que salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos. Que en cuanto a la valoración de la prueba el artículo 197 del código procesal civil señala que todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta utilizando su apreciación razonada. Sin embargo en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión.

SETIMO. Que ahora bien, conforme es de verse de la audiencia única llevada a cabo en autos, resultan puntos controvertidos en la presente acción 1.- determinar las necesidades de los menores alimentistas; 2.- determinar las posibilidades del que debe prestar los alimentos y 3.- determinar eventualmente el monto de pensión a asignar.

OCTAVO: de la legitimidad e interés para obrar: Que con el mérito de las partidas de nacimiento de los menores **C** y **D** que corren de fojas cuatro a cinco de autos respectivamente se acredita por un lado el interés y por otro la legitimidad para obrar de la demandante en representación de sus menores hijos en ejercicio de la patria potestad, por ende se encuentra habilitada a fin de accionar, instrumentos que al no haber sido materia de tacha y/o medio impugnatorio alguno mantienen en tal virtud su eficacia jurídica.

NOVENO. Que, ahora bien, *desarrollando los puntos controvertidos fijados en la audiencia se tiene que en cuanto a las necesidades de los menores alimentistas,* se tiene que con el mérito de las constancias de vacante de fojas seis a siete, contrato de prestación de servicios de movilidad de fojas ocho, tarjeta de control de pagos de fojas nueve, constancia de estudios emitida por la institución educativa 2049 de fojas diez, lista de útiles de fojas once a doce, boletas y recibos de fojas catorce y siguientes de autos emitidas por institución educativa inicial 315, Institución

Educativa 2019, Asociación de padres de familia IE 2084 Ugel 04 Comas, boutique Mac Collins, Plaza Veá, Tay Loy SA, Tottus, Metro, se acreditan fehacientemente las necesidades de los menores alimentistas, relativas a la alimentación vestido y educación, instrumentos que al no haber sido objeto de tacha alguna mantienen en tal virtud su eficacia jurídica

DECIMO: Que sin perjuicio de lo antes expuesto, se debe tener presente que tratándose de necesidades de menores de edad dichas necesidades se infieren indubitadamente no solo por su minoría de edad lo cual ciertamente les impide laborar y así procurarse directamente los alimentos, sino por su natural desarrollo bio físico de lo cual dependerá ciertamente su crecimiento a futuro, por lo cual, se concluye que a fin de atender dichas necesidades debe fijarse un monto de pensión a cargo del demandado que en lo que a aquel corresponde (dado que la obligación de pasar alimentos es de ambos padres y no de uno solo de ellos conforme lo señala la ley) satisfaga debidamente las necesidades de dichos menores sin que para ello se ponga en peligro la subsistencia del mismo, con lo cual se tiene por satisfecho el primer punto controvertido fijado en la audiencia única

DECIMO PRIMERO: Que *en cuanto al segundo punto controvertido, esto es determinar las posibilidades del que debe prestar alimentos* se tiene que con el mérito del original de boleta de pago del demandado obrante a fojas cuarenta y nueve emitida por la municipalidad de Jesús María se acredita fehacientemente que el mismo en su calidad de servidor de dicha comuna percibe un ingreso liquido ascendente a novecientos setenta y cinco y 20/100 nuevos soles, a lo que deducidos los descuentos de ley que la propia boleta señala, percibe un neto total ascendente a ochocientos dos y 90/100 nuevos soles, no habiéndose acreditado en autos que el demandado perciba otro ingreso adicional. Que adicionalmente a ello se debe tener igualmente en cuanto que conforme a la boleta informativa presentada por la demandante de fojas veinte de autos, se acredita que el demandado es co propietario conjuntamente con doña María luisa Castañeda Espinoza de un vehículo mayor adquirido nuevo del año 2012 (año igualmente de fabricación) *microbus* Hyundai con capacidad para once pasajeros, lo cual no ha sido desvirtuado por el demandado quien únicamente ha sostenido como único argumento que el vehículo no es suyo sino de su esposa, cosa que no se condice con la boleta informativa que lo señala

como co propietario tanto más si siendo un vehículo de la sociedad conyugal conforme señala, las rentas que genere el mismo igualmente le alcanzan, vehículo que según se aprecia está destinado al transporte de pasajeros, lo que permite concluir que el demandado goza de ingresos adicionales a los de su remuneración propia como servidor de la municipalidad de Jesús María, por lo que bajo dicho contexto y considerando el ingreso que percibe y el que eventualmente genera dicho vehículo es que se deberá fijar la pensión de alimentos de modo que esta por un lado atienda en lo que al demandado corresponde las necesidades de los menores y por otro de igual manera no ponga en peligro la subsistencia del propio demandado

DECIMO SEGUNDO: Que *en cuanto a las cargas y/u obligaciones que tuviera el demandado* se tiene que el demandado ha sostenido en su contestación que tiene carga familiar y esposa. Que al respecto no ha sustentado por qué serian ambos carga familiar siendo que respecto a don H el cual tiene más de 24 años conforme al DNI de fojas ciento veintiséis de autos, el demandado sostiene en su escrito de contestación que el mismo es hijo del “demandante” y que si bien es cierto es mayor de edad lo viene apoyando para lo cual adjunta pagos en el instituto sise de fojas ciento veintisiete a ciento cuarenta y cuatro. Que al respecto cabe señalar que no se justifica de modo alguno que el demandado priorice un apoyo a un mayor de edad por sobre el que debe respecto de sus menores hijos de ocho y nueve años de edad, por cuanto estos ultimo no pueden valerse por sí mismo lo cual no es el caso del mayor de edad. Que en igual sentido, el demandado no ha sustentado por qué sería una carga familiar su esposa, esto por cuanto no ha acreditado en primer lugar tal condición y que la misma se encuentre impedida de trabajar por impedimento físico o mental, de modo tal que tal argumento debe ser desestimado. En cuanto a los Boucher de compras que el demandado alega ha efectuado a favor de los menores y que aparecen en los reportes de financiera uno y banco cencosud de fojas ciento cuarenta y cinco a fojas ciento cincuenta y dos de autos y constancia de es salud, se debe tener presente que el hecho que el demandado efectúe gastos en favor de los menores no lo exime de su obligación de pasar de manera definitiva una pensión de alimentos que atienda debidamente las necesidades de ambos menores evitando con ello que de manera arbitraria y unilateral se efectúen gastos esporádicos y no continuos que no cumplan con su finalidad de atender debidamente y de manera

constante las necesidades de sus hijos. Que en cuanto a la solicitud para conciliar resulta irrelevante dicho medio probatorio presentado por el demandado en la medida que la misma no acredita acuerdo alguno.

DECIMO TERCERO: Que *en cuanto al tercer punto controvertido fijado en la audiencia única, esto es la determinación del monto a asignar* a favor de los menores alimentistas se debe tener en cuenta por un lado que se ha acreditado fehacientemente las necesidades de los menores y por otro que el demandado percibe una remuneración fija mensual en su calidad de servidor de la municipalidad de Jesús María y que si bien la misma no es una suma mayor ya que esta alcanza de manera neta la cantidad de ochocientos dos nuevos soles, se debe considerar que se presume con meridiana claridad que cuenta con otros ingresos al haber adquirido recientemente como co propietario, un vehículo microbús nuevo para transporte público del año 2012, lo que demuestra no solo su capacidad adquisitiva sino que evidentemente percibe ingresos adicionales, ya que no resultaría del todo lógico adquirir una unidad como la citada destinada a generar rentas para no generarlas, por lo que compulsando la prueba actuada en su conjunto y con criterio de conciencia y considerando igualmente que los obligados a prestar los alimentos son ambos padres y no solo uno de ellos, se fija en setecientos y 00/100 nuevos soles el monto que por concepto de alimentos deberá pasar el demandado a favor de sus hijos a razón de trescientos cincuenta y 00/100 nuevos soles para cada uno de ellos

DE LA PARTE RESOLUTIVA:

DECIMO CUARTO: Que, la demás prueba actuada y no glosada no enerva los considerandos de la presente resolución por lo que estando a los fundamentos expuestos y normas glosadas, administrando justicia a nombre de la nación, el señor juez del Primer juzgado de paz letrado de san miguel **FALLA:** declarando **FUNDADA EN PARTE** la demanda de **ALIMENTOS** interpuesta por **A**, en representación de sus menores hijos **C y D**, contra **B**; en consecuencia **ORDENO** que el demandado **B**, cumpla acudir en favor de sus menores hijos **C. P Y D**, con una pensión mensual y adelantada ascendente a **SETECIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES** a razón de **TRESCIENTOS CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES** para cada uno de los menores, la misma que se computara desde la

notificación de la presente demanda, más los intereses legales, con costos a cargo del demandado y sin costas por haber gozado la demandante a lo largo del proceso de exoneración expresa prevista por ley para la presentación de tasas; recordándose que en caso el demandado se atrase en tres o más cuotas dará lugar a que la actora pueda solicitar con el trámite de ley su inscripción en el REDAM.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

20° JUZGADO FAMILIA

EXPEDIENTE : 20921-2016-0-1801-JR-FC-20
DEMANDANTE : “A”
DEMANDADO : “B”
MATERIA : Alimentos

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES

Lima, veinte y siete de setiembre del año dos mil diecisiete.-

VISTOS; y **ATENDIENDO: PRIMERO:** Es materia de apelación la sentencia contenida en la resolución número diecinueve de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil quince, obrante a fojas 163-168, que declara **FUNDADA EN PARTE** la demanda de alimentos, interpuesta por **A**, en representación de sus menores hijos **C** y **D**, contra **B**; en consecuencia ordena que el demandado, cumpla con acudir a sus menores hijos, con una pensión mensual y adelantada ascendente a setecientos nuevos soles a razón de trescientos cincuenta nuevos soles PARA cada uno de los menores, la misma que se computará desde la notificación de la presente demanda, más los intereses legales, con costos a cargo del demandado y sin costas.

SEGUNDO: LA RECURRIDA.- La resolución apelada basa su decisión final en los siguientes aspectos: 1) Señala, que en cuanto a las cargas y/o obligaciones que tuviera el demandado, se tiene que el demandado ha sostenido en su contestación que tiene una carga familiar y esposa, siendo que al respecto no ha sustentado por qué serían ambos carga familiar siendo que don **H**, tiene más de 24 años de edad, conforme al DNI de fojas 126, que el demandado que si bien es cierto es mayor de edad, lo viene apoyando para lo cual adjunta pagos en el instituto sise de fojas 127 a 144, que al respecto cabe señalar que no se justifica de modo alguno que el demandado priorice un apoyo a un mayor de edad por sobre el que debe a sus menores hijos de ocho y nueve años de edad, por cuanto éstos último no pueden

valerse por sí mismo lo cual no es el caso de mayor de edad; en igual sentido, el demandado no ha sustentado por qué sería una carga familiar su esposa, esto por cuanto no ha acreditado en primer lugar tal condición y que la misma se encuentre impedida de trabajar por impedimento físico o mental, de modo tal que tal argumento debe ser desestimado. En cuanto a los Boucher de compras que el demandado alega financiera uno y banco CENCOSUD de fojas 145 a fojas 152 y constancia de ESSALUD, se debe tener presente que el hecho que el demandado efectúe gastos a favor de los menores, no lo exime de su obligación de pasar de manera definitiva una pensión de alimentos que atienda debidamente las necesidades de ambos menores evitando con ello que de manera arbitraria y unilateral se efectúen gastos esporádicos y no continuos que no cumplan con su finalidad de atender debidamente y de manera constante las necesidades de sus hijos; 2) Indica, que en cuanto al monto a asignar a favor de los menores alimentistas, el demandado percibe una remuneración fija mensual en su calidad de servidor de la municipalidad de Jesús María y que si bien la misma no es una suma mayor ya que esta alcanza de manera neta la cantidad de ochocientos dos soles, se debe considerar que se presume con meridiana claridad que cuenta con otros ingresos al haber adquirido recientemente como co propietario, un vehículo microbús para transporte público del año 2012, lo que demuestra no sólo su capacidad adquisitiva sino que evidentemente percibe ingresos adicionales, ya que no resultaría del todo lógico adquirir una unidad como la citada destinada a generar rentas para no generarlas, por lo que compulsando la prueba actuada en su conjunto y con criterio de conciencia y considerando igualmente que los obligados a prestar los alimentos son ambos padres y no sólo uno de ellos, se fija en setecientos nuevos soles el monto que por concepto de alimentos deberá pasar el demandado a favor de sus hijos a razón de trescientos cincuenta nuevos soles para cada uno de ellos.

TERCERO: EL RECURSO DE APELACION DEL DEMANDADO.- Como fundamentos de la apelación, se detalla entre otros, lo siguiente: 1) Señala, que está de acuerdo con pasar una pensión a sus hijos, pero se debe considerar el sueldo que gana como serenazgo mas, que es un sueldo que llega con la justa a mil soles mensuales y que a veces la municipalidad no le paga puntual; 2) Precisa, que si a su patrocinado le descuentan los setecientos soles a razón de trescientos cincuenta

nuevos soles, para cada uno de los menores, lo quedarían trescientos nuevos soles; que su el demandado tiene un hijo mayor de nombre H y que con lo poco que gana lo ayuda con los pagos en donde está estudiando en el Instituto SISE, administración bancaria, lo cual lo está apoyando económicamente con lo poco que tiene para sus estudios, que tiene una nueva pareja donde pagan alquiler de cuarto, luz, agua.-

CUARTO: MARCO NORMATIVO: a) La Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente establece en el artículo tres inciso uno: “ En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá el interés superior del niño”, siendo concordante este texto normativo con el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes vigente; b) El Código de los Niños y Adolescentes dispone en el numeral 92º: “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción”; c) El Código Civil en el Artículo 481 dispone: “Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”.-----

QUINTO.- MARCO JURISPRUDENCIAL.- Artículo 481 del Código Civil modificado por la Ley N° 30550. Criterios para fijar alimentos: Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor. El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. Estableciendo, que si bien es cierto que el artículo 481º del Código Civil no establece que debe investigarse rigurosamente el monto de los ingresos de quien está obligado a prestar los alimentos, deberá tenerse

en cuenta que si el demandado no cuenta con trabajo estable ni ingresos permanentes, los alimentos deben fijarse en forma prudencial (Expediente numero 2707-87-Segunda sala Civil de la Corte Superior de Lima, “Jurisprudencia Civil”, p.57). ---

SEXTO.- MARCO DOCTRINARIO.- La doctrina señala que los presupuestos legales de la obligación de alimentos son tres: uno subjetivo, constituido por la existencia del vínculo familiar, caracterizado por su carácter y vocación de permanencia, mientras los otros dos, de carácter objetivo, el estado de necesidad del acreedor y la disponibilidad económica del obligado pueden variar con el transcurso del tiempo (CORNEJO CHÁVEZ).-

SETIMO.- VALORACIÓN: En base a lo expuesto este Órgano Jurisdiccional Especializado en materia de Familia, estima que:

7.1. **LEGITIMIDAD PARA OBRAR.-** Se encuentra probado con el mérito del Acta de Nacimiento que corren a folios 03 y 04, el vínculo de parentesco consanguíneo en línea recta dentro del segundo grado descendente entre el demandado y los menores **C** y **D**, de 11 y 10 años en la actualidad.-

7.2. **NECESIDADES DEL MENOR ALIMENTISTA.-** Este presupuesto también se encuentra corroborado con el mérito de los instrumentos públicos antes citados, en el cual se demuestra su minoría de edad, presumiéndose sus necesidades.

7.3. **POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL OBLIGADO A PRESTAR ALIMENTOS.-**

Conforme al artículo 481° del Código Civil para la determinación de la obligación alimentaria no resulta necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos que debe prestar los alimentos, siendo que el emplazado señala mediante escrito de fojas 102-103, que labora y genera ingresos mensuales, adjuntando para ello boleta de pago, donde percibe ingresos por la suma neta de ochocientos dos nuevos soles; aunado a ello que el demandado es co propietario de un vehículo mayor, microbús, marca Hyundai con capacidad para once pasajeros, lo que permite concluir que el demandado percibe otro ingreso adicional; con lo cual queda acreditado que cuenta con capacidad económica y no padece de ningún impedimento físico o mental; lo cual conlleva a inferir encontrarse en posibilidades de asistir a su menor hijo, con una pensión adecuada, más aún, siendo prioritaria su obligación alimentaria frente a sus

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos:

GUÍA DE OBSERVACIÓN

<i>OBJETO DE ESTUDIO</i>	Cumplimiento de plazos	Claridad de resoluciones	Congruencia de los Puntos controvertidos	Condiciones que garantizan el debido proceso	Pertinencia de los medios probatorios	Idoneidad de la calificación jurídica de los hechos
<i>Proceso sobre Alimentos en el expediente N° 00227-2014-0-1824-JP-FC-01</i>	<i>SI CUMPLE</i>	<i>SI CUMPLE</i>	<i>SI CUMPLE</i>	<i>SI CUMPLE</i>	<i>SI CUMPLE</i>	<i>SI CUMPLE</i>

Anexo 3: Declaración de compromiso ético

De acuerdo a la presente: ***Declaración de compromiso ético*** el autor del presente trabajo de investigación titulado: *Caracterización del proceso sobre Alimentos, en el expediente N°00227-2014-0-1824-JP-FC-01-01, del Distrito Judicial de Lima – Perú, 2018*, declaro conocer el contenido de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI; que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual.

La investigación que se presenta es de carácter individual, se deriva de la Línea de Investigación, titulada: *“Análisis de sentencias de procesos culminados en los distritos judiciales del Perú, en función de la mejora continua de la calidad de las decisiones judiciales”*; en consecuencia, cualquier aproximación con otros trabajos, serán necesariamente con aquellas que pertenecen a la misma línea de investigación, no obstante es inédito, veraz y personalizado, el estudio revela la perspectiva de su titular respecto del objeto de estudio que fueron las sentencias del expediente judicial N°00227-2014-0-1824-JP-FC-01, sobre Alimentos.

Asimismo, acceder al contenido del proceso judicial permitió conocer los hechos judicializados y la identidad de los operadores de justicia, personal jurisdiccional, partes del proceso, testigos, peritos, etc..., al respecto mi compromiso ético es: no difundir por ningún medio escrito y hablado, ni expresarme en términos agraviantes ni difamatorios; sino, netamente académicos.

Finalmente, el trabajo se elaboró bajo los principios de la buena fe, principio de veracidad, de reserva y respeto a la dignidad humana, lo que declaro y suscribo, caso contrario asumiré exclusivamente mi responsabilidad.

Lima, 24 de julio del 2018.

LECARNAQUE DELGADO, KELVIN NOLBERTO
DNI. N 41774164